



*Congreso Nacional
H. Cámara de Diputados*

Décimo Tercer Punto

- ▶ **PROYECTO DE LEY: “DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS”.**
- ▶ **ORIGEN: Honorable Cámara de Senadores** ▶ **FECHA DE APROBACIÓN: 11/Junio/2020**
- ▶ **FECHA DE ENTRADA: 24/Junio/2020** ▶ **VENCE ART. 211 C.N.: 21/Setiembre/2020**
- ▶ **EXP. N°: S-198840**
- ▶ **COMISIONES: Asuntos Constitucionales
Asuntos Económicos y Financieros
Legislación y Codificación
Justicia, Trabajo y Previsión Social**
- ▶ **CANTIDAD DE VOTOS PARA SU APROBACIÓN O RECHAZO: MAYORÍA SIMPLE**
- ▶ **DECISIÓN:.....**
- ▶ **DESTINO:.....**

La versión completa del Expediente está en el Orden del día Digital www.diputados.gov.py/OD



CONGRESO NACIONAL

H. Cámara de Senadores

LEY N°

DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.

EL CONGRESO DE LA NACIÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y:

**TÍTULO PRELIMINAR
CAPÍTULO ÚNICO
DISPOSICIONES GENERALES**

Artículo 1.º Objeto y Finalidad.

La presente ley tiene por objeto:

- a) Establecer el régimen jurídico de los actos administrativos.
- b) Regular el procedimiento administrativo, incluyendo el régimen de los recursos administrativos y el procedimiento sancionador.
- c) Posibilitar la sustanciación de trámites y actuaciones administrativas por medios electrónicos.

Las normas de la presente ley tienen por finalidad proteger y garantizar los derechos, fundamentales o no, de las personas, la sujeción de las autoridades a la Constitución, a los preceptos del ordenamiento jurídico y al Derecho, para el eficaz cumplimiento de los fines públicos, el funcionamiento eficiente y democrático de la administración, y la observancia de los deberes del Estado y de los particulares.

Artículo 2.º Ámbito de aplicación.

Esta ley se aplicará a los procedimientos y actos administrativos que realicen:

- a) Los organismos de la Administración Central del Estado integrado por los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial; la Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la República, el Ministerio Público, el Consejo de la Magistratura, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y los órganos del Estado de naturaleza análoga.
- b) Los gobiernos departamentales; las universidades nacionales; los entes autónomos, autárquicos, los de regulación y de superintendencia; las entidades públicas de seguridad social; las empresas públicas y las empresas mixtas; las sociedades anónimas en las que el Estado sea socio mayoritario; las entidades financieras oficiales; la Banca Central del Estado, y las entidades de la Administración Pública Descentralizada.





CONGRESO NACIONAL

H. Cámara de Senadores

TÍTULO I

RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS

CAPÍTULO I

ACTO ADMINISTRATIVO

Artículo 3.º Concepto de acto administrativo.

Se entiende por acto administrativo, a los fines de esta ley, toda declaración unilateral efectuada por un órgano de la Administración Pública en ejercicio de funciones administrativas que produce efectos jurídicos de alcance general o particular.

Artículo 4.º Reglamentos y actos administrativos individuales.

A los efectos de la presente ley, el acto administrativo se clasifica en:

- a) Acto administrativo reglamentario o reglamento: que es el acto administrativo que produce efectos jurídicos de alcance general.
- b) Acto administrativo individual: que es el acto administrativo que produce efectos jurídicos de alcance particular.



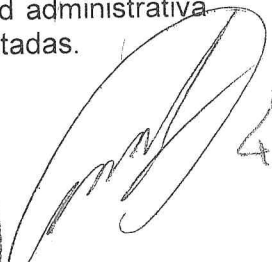
Artículo 5.º Clases de reglamentos.

Los reglamentos se clasifican en:

- a) Reglamento Interno, que va dirigido y obliga a los agentes de la Administración.
- b) Reglamento externo, que contiene disposiciones obligatorias para la generalidad de los habitantes, sea en materias determinadas, sea dentro de circunscripciones territoriales delimitadas.
- c) Reglamento de ejecución, dictado para el mejor cumplimiento de la ley. Detalla, precisa y aclara el contenido y alcance de la ley para viabilizar o facilitar su aplicación. No puede crear obligaciones o prohibiciones nuevas sino proveer las disposiciones necesarias para el mejor cumplimiento de la ley.

Artículo 6.º Competencia para dictar las diversas clases de reglamentos.

- 1) Tiene competencia para dictar reglamentos internos el Presidente de la República para los agentes de los órganos de la administración del Poder Ejecutivo, incluso para los entes descentralizados en materias que no estén especialmente regladas en sus respectivas leyes orgánicas. Tienen también competencia para dictar esta clase de reglamentos las autoridades que por ley o reglamento de organización administrativa o por facultad implícita en el orden jerárquico, pueden reglar la actuación de sus subordinados.
- 2) Los reglamentos externos sólo pueden ser dictados por la autoridad administrativa con expresa autorización legislativa, para materias y condiciones limitadas.



CONGRESO NACIONAL

H. Cámara de Senadores

- 3) Los reglamentos de ejecución los dicta el Poder Ejecutivo en virtud de la disposición del artículo 238 numeral 3. de la Constitución.

CAPÍTULO II

REQUISITOS DE REGULARIDAD Y VALIDEZ

Artículo 7.º Legalidad.

El acto debe estar positivamente autorizado por el ordenamiento jurídico.

Artículo 8.º Competencia.

El acto administrativo debe ser dictado por el órgano facultado por el ordenamiento jurídico, a través de la autoridad competente.

Artículo 9.º Finalidad.

El acto administrativo debe dictarse con la finalidad que resulte de las normas que lo autorizan, sin poder perseguir otros fines, públicos o privados, distintos de los que justifican el acto. Las medidas que el acto establezca deben ser proporcionalmente adecuadas a aquella finalidad.

Artículo 10. Presupuesto de hecho.

El acto debe responder al hecho o circunstancia que ha tenido en vista el ordenamiento jurídico para autorizarlo.

Artículo 11. Procedimiento.

Habiendo procedimiento prescrito en la ley o reglamento, el acto debe ceñirse a él. En su defecto, la autoridad administrativa puede adoptar el procedimiento que estime más adecuado para satisfacer los intereses públicos en el marco del respeto a los derechos constitucionales de las personas.

Artículo 12. Forma de los actos administrativos.

El acto debe observar la forma prescrita en el ordenamiento jurídico. Se expresará por escrito, a menos que su naturaleza exija o permita otra forma distinta de expresión y constancia más adecuada.

El acto escrito indicará la fecha y lugar en que es emitido, denominación del órgano del cual emana, nombre y firma de la autoridad interviniente. Si el acto o medida se ha generado por medios automatizados o electrónicos, deberá el sistema indicar tal circunstancia, expresando el órgano al cual se imputa el acto o medida.

Cuando el acto administrativo es producido por medio de sistemas automatizados o electrónicos, debe garantizarse al administrado conocer el nombre y cargo de la autoridad que lo expide, además de adecuarse a los requisitos específicos que la reglamentación específica determine para ellos.





CONGRESO NACIONAL

H. Cámara de Senadores

Cuando deban emitirse varios actos administrativos de la misma naturaleza, podrá ser empleada firma mecánica o electrónica o integrarse en un solo documento bajo una misma motivación, siempre que se individualice a los administrados sobre los que recaen los efectos del acto. Para todos los efectos subsiguientes, los actos administrativos serán considerados como actos diferentes.

CAPÍTULO III

VALIDEZ Y EFICACIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO

Artículo 13. Presunción de legitimidad y ejecutividad.

El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su ejecutividad faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que la ley o la naturaleza del acto exigieren intervención judicial.

Artículo 14. Eficacia.

El acto administrativo individual adquiere eficacia desde el día siguiente al de su notificación al interesado o desde el día que dicho acto determine.

El acto administrativo reglamentario adquiere eficacia desde el día siguiente al de su publicación o desde el día que dicho acto determine.

La reglamentación determinará los medios, requisitos y formalidades de las notificaciones y publicaciones.

Artículo 15. Ejecutoriedad.

Los actos administrativos causan inmediata ejecutoriedad, salvo en aquellos casos en que una disposición establezca lo contrario o necesiten aprobación o autorización.

Artículo 16. Fuerza Ejecutiva.

El instrumento en que conste el acto administrativo, otorgado en debida forma por el órgano competente, es instrumento público y tiene fuerza ejecutiva.

Artículo 17. Prescripción Liberatoria.

Las acciones provenientes de los actos administrativos creadores de obligaciones a cargo de los administrados, prescribirán en el término de dos años, salvo que en leyes especiales se establezcan plazos diferentes.

Artículo 18. Caducidad.

Los derechos y obligaciones regidos por el Derecho Administrativo pueden extinguirse también por caducidad, cuando el acto administrativo que los concede o establece, así lo prescribe, o cuando la extinción se produce ipso jure por disposición de la ley, como el vencimiento de una concesión o del periodo legal de un cargo público.

El tiempo de caducidad no se suspende ni interrumpe.



CONGRESO NACIONAL

H. Cámara de Senadores

CAPÍTULO IV

SANCIÓN DE LAS IRREGULARIDADES DEL ACTO ADMINISTRATIVO

Artículo 19. Nulidad y anulabilidad.

El acto administrativo puede ser nulo o anulable, según sea la gravedad de la trasgresión de las normas a que está sujeto.

Artículo 20. Nulidad.

Es nulo el acto administrativo en los siguientes casos:

- a) Sanción expresa de nulidad para el caso, estatuida en la ley.
- b) Acto administrativo dictado contra expresa prohibición de la ley.
- c) Inexistencia del presupuesto de hecho, falta de causa o falsa causa.
- d) Actos que vulneren la Constitución o regulen materias reservadas a las leyes.
- e) Incompetencia manifiesta por razón de la materia o del territorio.
- f) Inobservancia total y absoluta del procedimiento exigido en la ley, especialmente las relativas a la defensa del particular afectado.
- g) Inobservancia total y absoluta de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados.
- h) Error manifiesto de hecho o de derecho, dolo o violencia, en cuanto hubiese determinado el pronunciamiento o desviado el acto de su correcta finalidad.
- i) Cuando el acto constituya un hecho punible o fuera consecuencia de éste.

Artículo 21. Anulabilidad.

Es anulable el acto administrativo irregular que no esté incurso en las causales de nulidad establecidas en el artículo anterior y sea subsanable sin grave lesión del ordenamiento jurídico.

No obstante, el defecto de forma o de procedimiento solo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados.

La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas sólo implicará la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo.

Artículo 22. Revisión de oficio de los actos nulos.

Los actos que incurren en las causales de nulidad establecidas en el artículo 20 carecen de estabilidad y no pueden válidamente generar derechos subjetivos frente al orden público y a la necesidad de vigencia de la legalidad. Podrán ser revocados o sustituidos por razones de ilegitimidad aun en sede administrativa.





CONGRESO NACIONAL

H. Cámara de Senadores

Artículo 23. Revisión de oficio de actos anulables que no generen derechos subjetivos o no afecten intereses legítimos.

Los actos anulables que no generen derechos subjetivos o no afecten intereses legítimos podrán ser revocados y subsanados de oficio en sede administrativa en cualquier momento, en todo o en parte, por la misma autoridad que los dictó, o por el respectivo superior jerárquico.

Artículo 24. Declaración judicial de nulidad de actos anulables.

Si el acto anulable estuviere firme y consentido y hubiere generado derechos subjetivos a favor de particulares que se estén cumpliendo, sólo se podrá impedir su subsistencia y la de los efectos aún pendientes mediante declaración judicial de nulidad demandada por la Administración que emitió el acto.

Será competente para declarar la nulidad de los actos anulables que demande la Administración, el Tribunal de Cuentas de la República.

Artículo 25. Saneamiento del acto anulable.

El acto administrativo afectado por alguna causal de anulabilidad puede ser saneado mediante:

- a) ratificación por el órgano superior, cuando el acto hubiere sido emitido con incompetencia en razón de grado y siempre que la avocación, delegación o sustitución fueren procedentes.
- b) confirmación por el órgano que dictó el acto, subsanando el vicio que lo afecte.
- c) Los efectos del saneamiento se retrotraerán a la fecha de emisión del acto objeto de ratificación o confirmación.

Artículo 26. Errores materiales.

La autoridad puede corregir en cualquier momento los errores de escritura, de operaciones aritméticas y demás errores notorios del acto administrativo, de oficio o a petición de parte.

CAPÍTULO V

REVOCACIÓN DE LOS ACTOS REGULARES

Artículo 27. Revocación de actos administrativos discrecionales.

Es revocable el acto administrativo cuando fuere discrecional y de ejecución sucesiva o continuada en los siguientes casos:

- a) Por cambio de las circunstancias de hecho.
- b) Por cambio de nueva tecnología aplicable en la materia.
- c) Por cambio de la ley bajo la cual se produjo el acto.





CONGRESO NACIONAL

H. Cámara de Senadores

- d) Por cambio del criterio de la autoridad respecto del mejor modo de satisfacer las necesidades públicas.

En todos estos casos la revocación sólo tiene efecto para el futuro.

Artículo 28. Actos irrevocables.

Es irrevocable el acto administrativo reglado que genere derechos subjetivos o afecte intereses legítimos, tanto si es de ejecución única como de ejecución sucesiva o continuada.

Es irrevocable el acto administrativo discrecional de ejecución única que genere derechos subjetivos o afecte intereses legítimos.

Artículo 29. Revocación con indemnización.

Aun cuando el acto administrativo sea irrevocable según las reglas precedentes, la autoridad puede disponerlo para impedir o eliminar graves perjuicios al bien público, indemnizando en todo caso al particular el daño por la revocación.

Artículo 30. Racionalidad de la revocación.

Si la facultad para la revocación del acto es discrecional, la autoridad debe ejercerla razonablemente, atendiendo tanto a la causa como a la finalidad.

Artículo 31. Revocación a favor del particular.

Pueden ser revocados los actos considerados irrevocables cuando la revocación es a favor del particular afectado, siempre que no concurren condiciones que lo impidan como las siguientes:

- a) Que no se trate de facultades regladas de las que no puede apartarse la autoridad administrativa.
- b) Que lo que se concede con la revocación a uno, no se le niegue a otro.
- c) Que la revocación no afecte derechos de terceros.

Artículo 32. Reglas no aplicables.

Las precedentes reglas no tienen aplicación en el proceso de formación del acto administrativo que puede ser revocado, modificado o confirmado en las diversas instancias.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name.



A large, stylized handwritten signature in black ink, possibly reading "M. de S." or similar.



CONGRESO NACIONAL

H. Cámara de Senadores

TÍTULO II

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

CAPÍTULO I

PRINCIPIOS DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

Artículo 33. Aplicación de principios jurídicos.

Toda actuación administrativa se sustenta fundamentalmente en los principios expuestos en el presente artículo, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo.

Los principios señalados servirán también de criterio interpretativo para resolver las cuestiones que puedan suscitarse en la aplicación de las reglas de procedimiento, como parámetros para la generación de otras disposiciones administrativas de carácter general, y para suplir los vacíos en el ordenamiento administrativo. La relación de principios enunciados no tiene carácter taxativo ni limitativo. Estos son:

- a) Principio de la legalidad. Los actos y procedimientos administrativos se ajustarán al ordenamiento jurídico.
- b) Respeto a los derechos fundamentales de las personas. La substanciación de cualquier procedimiento administrativo deberá respetar los derechos fundamentales de las personas previstos en la Constitución y en las leyes. En todo procedimiento administrativo del cual pudiera derivarse una sanción o la revocación o cancelación de un acto administrativo que haya otorgado un derecho subjetivo a los administrados se garantizará el derecho a la defensa.
- c) Principio de escrituración. El procedimiento administrativo y los actos administrativos a los cuales da origen se expresarán por escrito en formatos impresos o electrónicos, a menos que su naturaleza exija o permita otra forma más adecuada de expresión y constancia.
- d) Principio de gratuidad. Todo el procedimiento administrativo y las actuaciones derivadas del mismo serán gratuitos para los interesados. Los particulares sólo estarán obligados a realizar prestaciones personales o patrimoniales en favor de la Administración, cuando la ley expresamente lo establezca.
- e) Principio de celeridad y economía procesal. Los procedimientos administrativos se desarrollarán con economía, simplicidad y celeridad, evitando la realización de trámites y diligencias innecesarias o que constituyan mero formalismo, a fin de alcanzar una decisión en tiempo razonable, sin que ello vulnere el ordenamiento jurídico.
- f) Principio de simplicidad. Los trámites establecidos por la autoridad administrativa deberán ser sencillos, debiendo eliminarse toda complejidad innecesaria. Los requisitos exigidos deberán ser racionales y proporcionales a los fines que se persigue cumplir.
- g) Principio de Oficiosidad. Sin perjuicio del impulso que realicen las partes, el procedimiento administrativo será impulsado de oficio por el funcionario responsable. El funcionario responsable de cada proceso podrá disponer de oficio el practicamiento de actuaciones, diligenciamientos de prueba, como cualquier otro acto de impulso procesal que no haya sido ofrecido ni requerido por las partes.





CONGRESO NACIONAL

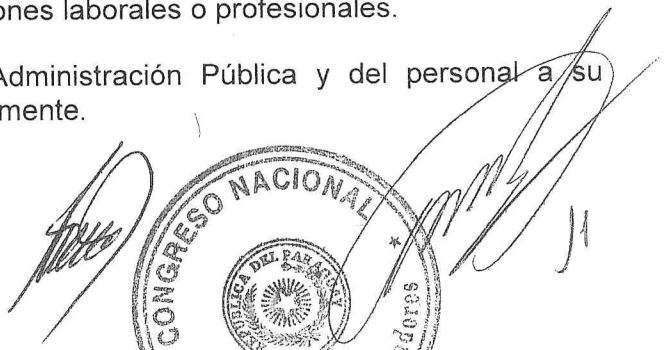
H. Cámara de Senadores

- h) Principio de objetividad. Las autoridades administrativas deberán actuar sin ninguna clase de discriminación hacia los administrados, tanto en la substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte, otorgándoles tratamiento y tutela igualitarios frente al procedimiento, resolviendo conforme al ordenamiento jurídico y con atención al interés general.
- i) Principio del informalismo. Las normas de procedimiento deben ser interpretadas en forma favorable a la admisión y decisión final de las pretensiones de los administrados, de modo que sus derechos e intereses no sean afectados por la exigencia de aspectos formales que puedan ser subsanados dentro del procedimiento, siempre que el informalismo no afecte derechos de terceros o el interés público.
- j) Principio de transparencia y de publicidad. El procedimiento, así como toda actuación administrativa, se realizarán con transparencia, de manera que permitan y promuevan el conocimiento, contenidos y fundamentos de las decisiones que se adopten en los mismos. En consecuencia, salvo las excepciones establecidas en el ordenamiento jurídico, son públicos los actos de los órganos de la Administración y los documentos que le sirvan de sustento o complemento directo o esencial.
- k) Principio de razonabilidad y proporcionalidad. Todas las decisiones de la autoridad administrativa deben ajustarse a los límites de la facultad atribuida y mantener la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido. Las competencias administrativas sólo pueden ser válidamente ejercidas en la extensión e intensidad proporcionales a lo que sea realmente demandado para el cumplimiento de la finalidad del interés público a que están unidas.

Artículo 34. Derecho de las personas en los procedimientos administrativos.

Las personas, en sus relaciones con la Administración, tienen derecho a:

- a) Conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados, y obtener copia de los documentos que rolan en el expediente y la devolución de los originales, salvo que por mandato legal o reglamentario éstos deban ser acompañados a los autos, a su costa.
- b) Identificar a las autoridades y al personal al servicio de la Administración, bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos.
- c) Eximirse de presentar documentos que no correspondan al procedimiento, o que ya se encuentren en poder de la Administración.
- d) Acceder a las actuaciones en los términos previstos en la ley.
- e) Ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y funcionarios, que habrán de facilitarles el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. Los actos de instrucción que requieran la intervención de los interesados habrán de practicarse en la forma que resulte más cómoda para ellos y sea compatible, en la medida de lo posible, con sus obligaciones laborales o profesionales.
- f) Exigir las responsabilidades de la Administración Pública y del personal a su servicio, cuando así corresponda legalmente.





CONGRESO NACIONAL

H. Cámara de Senadores

- g) Obtener información acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos, actuaciones o solicitudes que se propongan realizar, y cualesquiera otros que les reconozcan la Constitución y las leyes.

Artículo 35. Procedimientos especiales.

Los procedimientos administrativos que tengan regímenes especiales en las leyes seguirán vigentes y las disposiciones sobre procedimientos establecidas en los Capítulos III y V del presente Título les serán aplicables sólo en forma supletoria.

El Capítulo IV referido al régimen recursivo se aplicará obligatoriamente a todo procedimiento.

CAPÍTULO II

EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO

Artículo 36. Formación del expediente.

El procedimiento administrativo deberá constar en un expediente escrito en formatos impresos o electrónicos, a menos que su naturaleza exija o permita otra forma más adecuada de expresión y constancia.

En el expediente escrito se asentarán los documentos presentados por los interesados, por terceros y otros órganos públicos, con expresión de la fecha y hora de su recepción. Asimismo, se incorporarán las actuaciones y los documentos y resoluciones que el órgano administrativo remita a los interesados, a terceros o a otros órganos públicos y las notificaciones y comunicaciones a que estas den lugar, con expresión de la fecha y hora de su envío.

Artículo 37. Información general obligatoria.

Los organismos y entidades sometidos a la presente ley, difundirán por los medios de publicación que se establezcan en la reglamentación respectiva, datos referidos a su estructura orgánica y funcional, como así detalles en relación a las prestaciones públicas que le corresponden, con claridad y precisión.

Artículo 38. Tramitación expeditiva.

Los órganos administrativos utilizarán procedimientos expeditivos en la tramitación de aquellos asuntos que así lo justifiquen. Cuando sean idénticos los motivos y fundamentos de las resoluciones, se podrán usar medios de producción en serie, siempre que no se lesionen las garantías jurídicas de los interesados.

CAPÍTULO III

PROCEDIMIENTO ORDINARIO ADMINISTRATIVO

Artículo 39. Procedimiento no formal.

El procedimiento ordinario administrativo no es formal, en el sentido que a continuación se expresa:





CONGRESO NACIONAL

H. Cámara de Senadores

- a) Si no existe procedimiento especial prescrito en la ley, la autoridad llamada a ejecutarla puede elegir el procedimiento más adecuado, atendiendo a la celeridad, eficacia y razonabilidad de la ejecución, dentro del marco de las disposiciones establecidas en la presente ley.
- b) Puede obviar formas o etapas del procedimiento, incluso resolver con la mera fórmula “como se pide” o “no ha lugar” si la cuestión planteada es simple y de toda evidencia en cuanto a los hechos alegados y el derecho aplicable.
- c) Las deficiencias formales no darán lugar a nulidad siempre que sean subsanables, retro trayendo el procedimiento en lo que fuere posible.

Artículo 40. Parte interesada.

Es parte interesada, legitimada para el procedimiento administrativo:

- a) La que invoque un derecho o impugne una obligación en un acto administrativo dictado o solicitado para su caso particular (derecho subjetivo).
- b) La que solicite la declaración de un derecho a su favor o la exención de una obligación, de una disposición de carácter general que eventualmente le sea aplicable (interés legítimo).
- c) La que sea o pueda ser afectada por la decisión de la autoridad al resolver sobre derechos u obligaciones de terceros.
- d) La que recurre a la instancia administrativa como procedimiento previo, para promover demanda ordinaria contra la Administración.

Artículo 41. Capacidad de obrar.

Tienen capacidad para actuar en el procedimiento administrativo las personas físicas y jurídicas.

Las asociaciones que carezcan de personalidad jurídica podrán actuar en cuestiones que les afecten directamente, o en representación de sus miembros o asociados involucrados en dichas cuestiones de interés gremial o colectivo.

Artículo 42. Actuación por sí o por poder.

La parte interesada podrá ejercer sus derechos ante la Administración por si misma o mediante mandatario, que deberá ser abogado matriculado. En este caso, la parte interesada podrá otorgar poder por escritura pública, autorización por certificación de firma por escribano público o mediante acta, extendida en el expediente administrativo.

Artículo 43. Notificaciones.

La resolución puede ser notificada directamente al interesado con la firma del mismo en el expediente, por cédula de notificación, por correo con aviso de retorno, telegrama colacionado o medios electrónicos, conforme a la reglamentación que se dicte para el efecto. En caso de ser ignorado el domicilio, se citará a la parte interesada por edictos que se publicarán en los medios que determine la reglamentación, bajo apercibimiento de que, en caso de no comparecer con justa causa, se proseguirá el procedimiento en rebeldía.



CONGRESO NACIONAL

H. Cámara de Senadores

Artículo 44. Los plazos.

Los plazos serán obligatorios para los interesados y la Administración.

Cuando no se hubiere establecido plazo especial para la realización de trámites, notificaciones y citaciones, cumplimiento de intimaciones y emplazamientos, contestación de traslados, vistas e informes, aquel será de diez días.

Antes del vencimiento de un plazo podrá la Administración de oficio o a pedido del interesado disponer su ampliación, por el tiempo razonable que fijare mediante resolución fundada y siempre que no resulten perjudicados derechos de terceros.

Artículo 45. Cómputo de plazos.

Los términos en días se computarán desde el día siguiente de la notificación del acto administrativo. Sólo se contarán los días hábiles, salvo disposición legal en contrario o habilitación resuelta de oficio o petición de parte. En la instancia administrativa se computarán como días hábiles los días sábados sólo cuando la administración esté abierta al público en esos días.

Los términos de meses y años se computan desde el día siguiente a la fecha de su notificación, hasta la medianoche del día de la misma fecha del calendario, incluidos los feriados, sin consideración al número de días del mes o del año. Si en el mes de vencimiento del término no hubiere día correspondiente al de su comienzo, el término vencerá el último día del mes de vencimiento.

Artículo 46. Iniciación del procedimiento.

El procedimiento podrá ser iniciado por la parte interesada o de oficio por la autoridad competente.

Artículo 47. Presentación.

El escrito de presentación del interesado expresará su nombre y apellido, domicilio, el carácter en que se presenta, la autoridad a la que se dirige y la exposición sucinta de los hechos y derechos que invoca.

Si existe prueba documental que respalde su derecho, la acompañará o indicará la oficina o lugar en que se encuentra. Si desea su desglose y devolución presentará copias que serán autenticadas por el encargado de la mesa de entrada o de la recepción del documento o por el funcionario que intervenga en el trámite.

Artículo 48. Información y orientación.

Si el interesado lo necesita, los funcionarios de la oficina competente para atender la cuestión, le informarán y orientarán sobre la corrección de su escrito, la autoridad competente y los demás requisitos que deben observarse.

Artículo 49. Impulso del procedimiento.

El procedimiento se impulsará a instancia del interesado o de oficio por la autoridad en todo lo conducente al objeto del mismo.





CONGRESO NACIONAL

H. Cámara de Senadores

Artículo 50. Pruebas.

Si los hechos alegados por el interesado no hubiesen sido suficientemente justificados con las pruebas que haya acompañado o indicado en su primera presentación, la autoridad le emplazará para que lo haga por los medios, plazos y formas que le serán señalados.

Sin perjuicio de las pruebas aportadas, la Administración podrá ordenar todas aquellas diligencias que considere pertinentes.

Artículo 51. Colaboración.

Los órganos de la Administración en general deberán colaborar con la autoridad interviniente proporcionando sin tardanza los informes, certificados u otros documentos que ésta les solicite.

La comunicación de dicha autoridad con los demás órganos se hará directamente, sin necesidad de recurrir a la autoridad superior para que ésta retransmita el pedido.

Artículo 52. Pronunciamiento en el procedimiento ordinario.

La resolución que ponga fin al procedimiento ordinario decidirá las cuestiones planteadas por los interesados y será fundada. La resolución debe ser pronunciada por escrito y motivada con la mención de los hechos probados (motivados) y cita de las disposiciones legales aplicables (justificación). La Administración Pública está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos, cualquiera sea su forma de iniciación.

El plazo máximo para dictar resolución en el procedimiento ordinario será de tres meses desde la iniciación del procedimiento, salvo plazo distinto, establecido por ley.

En el caso de que el hecho y el derecho invocados por el peticionante sean manifiestos, la resolución puede simplemente expresar su conformidad con la petición, en la inteligencia de que podrán ser demostrados obviamente sus fundamentos si la misma resolución llega a ser recurrida.

Artículo 53. Silencio de la Administración.

En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, si no se dictare la resolución definitiva dentro de los plazos establecidos en la ley se tendrá por denegada la petición, a los efectos de interponer los recursos administrativos respectivos.

Artículo 54. De la Renuncia.

Todo interesado podrá desistir de su solicitud, o cuando ello no esté prohibido por el ordenamiento jurídico, renunciar a sus derechos. Si el escrito de iniciación se hubiera formulado por dos o más interesados, el desistimiento o la renuncia solo afectará a aquellos que lo hubiesen formulado.

Artículo 55. Medidas Cautelares.

La autoridad administrativa podrá dictar y disponer las medidas cautelares que considere necesarias para preservar la salud, la seguridad pública, el orden o cualquier otra razón de interés general.





CONGRESO NACIONAL

H. Cámara de Senadores

Podrá igualmente disponerlas para asegurar el resultado de los procedimientos conducidos por la Administración sustanciados de oficio o por impulso de los administrados.

La Administración podrá hacer efectivas y ejecutar las medidas cautelares que dicte o disponga por sus propios medios, salvo los casos donde la ley requiera intervención y autorización judicial expresa.

Artículo 56. Pronunciamiento en peticiones que no requieran substanciación.

A falta de disposición expresa, toda petición, presentación o solicitud de naturaleza administrativa dirigida por los particulares a los órganos de la administración pública y que no requiera substanciación, deberá ser resuelta dentro de los veinte días siguientes a su presentación o a la fecha posterior en la que el interesado hubiere cumplido los requisitos legales exigidos.

A los efectos previstos en el presente artículo, la reglamentación de esta ley determinará cuáles son las peticiones que no requieren de substanciación.

Artículo 57. Normas procesales supletorias.

Son de aplicación supletoria en el procedimiento ordinario administrativo las normas del Código Procesal Civil, siempre que no sean incompatibles con las de la presente ley que se consideran especiales en materia administrativa.

CAPÍTULO IV

PROCEDIMIENTO DE LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

SECCIÓN PRIMERA

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 58. Procedencia.

Los recursos administrativos proceden contra toda clase de resolución de carácter definitivo o actos administrativos individuales que tengan carácter equivalente, siempre que dichos actos administrativos a criterio de los interesados afecten, lesionen o pudieren causar perjuicio a sus derechos subjetivos o intereses legítimos.

Para efectos de esta ley, se entenderán por resoluciones definitivas o actos administrativos que tengan carácter equivalente a aquellos actos administrativos que pongan fin a una actuación administrativa.

El régimen recursivo previsto en el presente capítulo será común y obligatorio para todos los procedimientos administrativos.

Artículo 59. Improcedencia.

No proceden recursos administrativos contra los reglamentos.





CONGRESO NACIONAL

H. Cámara de Senadores

Tampoco proceden contra los actos administrativos de carácter preparatorio o de mero trámite, salvo que se trate de actos que determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión.

Artículo 60. Forma de Presentación.

Los recursos se presentarán de manera fundada, cumpliendo con los requisitos y formalidades, en los plazos que establece la presente ley.

Artículo 61. Efectos de la interposición de recursos administrativos.

La interposición de cualquier recurso no suspenderá la ejecución del acto impugnado, salvo que una norma expresa establezca lo contrario. No obstante, el órgano administrativo competente para resolver el Recurso, podrá suspender la ejecución del acto recurrido, de oficio o a solicitud del recurrente, cuando:

- a) Dicha ejecución pueda causar un daño de difícil o imposible reparación al recurrente o un daño proporcionalmente mayor que los perjuicios que la suspensión le acarrearía al Estado.
- b) Cuando se alegue y acredite prima facie un vicio grave que acarree la nulidad del acto impugnado.
- c) Por razones de interés público.

Artículo 62. Terceros afectados.

Si con la impugnación de una resolución se afectasen derechos subjetivos o intereses legítimos de terceras personas, individuales o colectivas, la autoridad administrativa deberá hacerles conocer la correspondiente impugnación.

Artículo 63. Resolución.

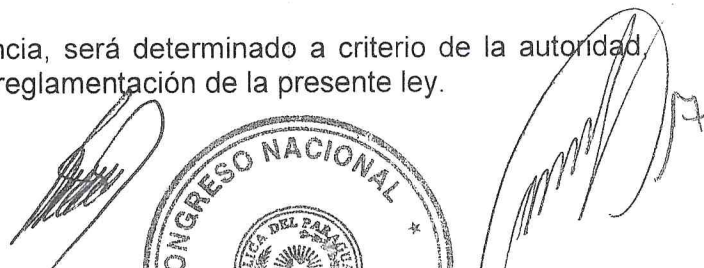
Los recursos administrativos previstos en la presente ley, serán resueltos confirmando o revocando total o parcialmente la resolución impugnada, o en su caso, desestimando el recurso si éste estuviese interpuesto fuera de término, no cumplierse las formalidades señaladas expresamente en disposiciones aplicables o si no cumplierse los requisitos de legitimación respectivos.

La resolución expondrá en forma motivada los aspectos de hecho y de derecho en los que se fundare, y se referirá siempre a las pretensiones formuladas por el recurrente, sin que en ningún caso pueda agravarse su situación inicial como consecuencia exclusiva de su propio recurso.

Artículo 64. Prueba.

La autoridad administrativa, de oficio o a pedido de parte, podrá determinar la apertura de un término de prueba y ordenará la realización de las diligencias correspondientes.

El plazo para la prueba en esta instancia, será determinado a criterio de la autoridad, conforme a las circunstancias y conforme a la reglamentación de la presente ley.





CONGRESO NACIONAL

H. Cámara de Senadores

El término de prueba procederá sólo cuando haya nuevos hechos o documentos que no estén considerados en el expediente. Los recursos administrativos se ajustarán al procedimiento general establecido en la presente ley.

SECCIÓN SEGUNDA

RECURSO DE RECONSIDERACIÓN

Artículo 65. Plazo.

El recurso de reconsideración procede contra las resoluciones definitivas o actos administrativos que tengan carácter equivalente y deberá ser interpuesto por el interesado ante la autoridad administrativa que pronunció la resolución impugnada o dictó el acto que es materia de impugnación, dentro del plazo de diez días siguientes a su notificación.

Artículo 66. Plazo de Resolución y Alcance.

El órgano ante el cual se interpone el recurso de reconsideración tendrá un plazo de veinte días para sustanciarlo y resolverlo. En caso de rechazarse el mismo, el interesado podrá recurrir a la impugnación judicial por la vía del proceso Contencioso-Administrativo. Si vencido el plazo no se dictare resolución, el recurso se tendrá por denegado pudiendo el interesado igualmente recurrir a la impugnación judicial y por la misma vía.

Antes de recurrir a la impugnación judicial, el interesado podrá y si lo prefiere interponer previamente Recurso Jerárquico.

SECCIÓN TERCERA

RECURSO JERÁRQUICO

Artículo 67. Recurso Jerárquico.

Contra la resolución que resuelva el recurso de reconsideración, el interesado o afectado podrá interponer el Recurso Jerárquico. En estos casos, la interposición del Recurso Jerárquico será optativa para el interesado.

El Recurso Jerárquico también podrá ser interpuesto directamente contra las resoluciones definitivas o actos administrativos que tengan carácter equivalente, anteponiéndolo al recurso de reconsideración.

El Recurso Jerárquico se interpondrá ante el órgano jerárquico competente para resolverlo. El plazo para interponer el recurso es de diez días contados desde el día siguiente a su notificación, o al día en que se venció el plazo para resolver el recurso de reconsideración.

Interpuesto el recurso, el órgano competente requerirá, de inmediato, la remisión del expediente, al inferior que hubiere dictado el acto recurrido, quien deberá remitirlo dentro del plazo de 48 horas.

Artículo 68. Plazo y alcance.

Para sustanciar y resolver el Recurso Jerárquico, la autoridad administrativa competente, tendrá el plazo de veinte días.





CONGRESO NACIONAL
H. Cámara de Senadores

El plazo se computará a partir de la interposición del recurso. Si vencido dicho plazo no se dicta resolución, el recurso se tendrá por denegado.

Las resoluciones de los recursos jerárquicos deberán definir el fondo del asunto en trámite y en ningún caso podrán disponer que la autoridad inferior dicte una nueva resolución.

Resuelto el Recurso Jerárquico el interesado podrá acudir a la impugnación judicial por la vía del proceso Contencioso-Administrativo.

SECCIÓN CUARTA

AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA

Artículo 69. Agotamiento de la vía administrativa.

La vía administrativa quedará agotada en los casos siguientes:

- a) Cuando se trate de resoluciones que resuelvan los recursos de reconsideración, o los jerárquicos en su caso, cuando el administrado haya optado por deducirlos.
- b) Cuando se trate de actos administrativos contra los cuales no proceda ningún recurso en vía administrativa conforme a lo dispuesto en ésta o en otras leyes.
- c) Cuando se trate de resoluciones distintas de las señaladas en los literales anteriores, siempre que una ley así lo establezca.

Artículo 70. Proceso Contencioso Administrativo.

Resuelto el Recurso de Reconsideración o el Jerárquico, en caso de que se haya optado interponerlo, podrá el interesado acudir a la impugnación judicial por la vía del proceso Contencioso-Administrativo, dentro del plazo de dieciocho días.

CAPÍTULO V

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

SECCIÓN PRIMERA

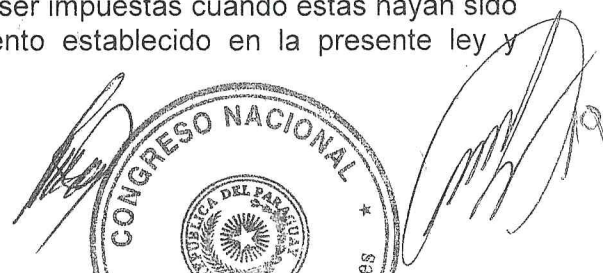
PRINCIPIOS GENERALES

Artículo 71. Principios Sancionadores.

Las sanciones administrativas que las autoridades competentes deban imponer a las personas, estarán sometidas a los principios de legalidad, tipicidad, presunción de inocencia, proporcionalidad, irretroactividad y verdad material.

Artículo 72. Principio de Legalidad.

Las sanciones administrativas solamente podrán ser impuestas cuando éstas hayan sido previstas por norma expresa, conforme al procedimiento establecido en la presente ley y disposiciones reglamentarias aplicables.





CONGRESO NACIONAL

H. Cámara de Senadores

Artículo 73. Principio de Tipicidad.

Son infracciones administrativas las acciones u omisiones expresamente definidas en las leyes y disposiciones reglamentarias.

Solo podrán imponerse aquellas sanciones administrativas expresamente establecidas en las leyes y disposiciones reglamentarias.

Las sanciones administrativas, sean o no de naturaleza pecuniaria, no podrán implicar en ningún caso ni directa ni indirectamente la privación de libertad.

Artículo 74. Principio de Presunción de Inocencia y derechos de las personas.

Se presume la inocencia de las personas mientras no se demuestre lo contrario en idóneo procedimiento administrativo.

En el procedimiento administrativo sancionador, el presunto infractor tendrá derecho a:

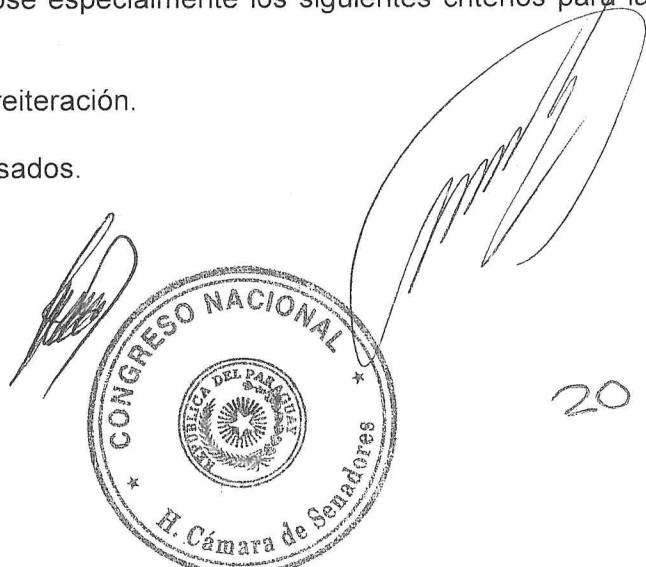
- a) Recibir la comunicación de su imputación en forma previa y detallada, así como a disponer de copias, medios y plazos indispensables para la preparación de su defensa en libre comunicación.
- b) Ofrecer, practicar, controlar e impugnar pruebas.
- c) Acceder, por sí o por intermedio de su defensor, a las actuaciones del procedimiento, las cuales en ningún caso podrán ser secretas para él.
- d) A abstenerse de declarar, o a no declarar contra sí mismo, contra su cónyuge o contra la persona con quien está unida ni contra sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad inclusive.
- e) A que no se le opongán pruebas obtenidas o actuaciones producidas en violación de las normas jurídicas.

Artículo 75. Principio de Proporcionalidad.

El establecimiento de sanciones pecuniarias deberá prever que la comisión de las infracciones tipificadas no resulte más beneficiosa para el infractor que el cumplimiento de las normas: infringidas.

Se deberá guardar la debida adecuación entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la sanción aplicada, considerándose especialmente los siguientes criterios para la graduación de la sanción a aplicar:

- a) La existencia de intencionalidad o reiteración.
- b) La naturaleza de los perjuicios causados.
- c) La reincidencia.





CONGRESO NACIONAL

H. Cámara de Senadores

Artículo 76. Principio de Irretroactividad.

Sólo serán aplicables las disposiciones sancionadoras que estuvieran vigentes en el momento de producirse los hechos que constituyan la infracción administrativa.

Artículo 77. Principio de Verdad Material.

El procedimiento administrativo sancionador, durante su tramitación, deberá propender a la búsqueda de la verdad material u objetiva, garantizando con su ejercicio, la observancia de los demás principios contemplados en este capítulo. En tal sentido, la Administración podrá requerir y producir cuantos dictámenes e informes que resulten necesarios para el esclarecimiento del hecho investigado.

Artículo 78. Prescripción de Infracciones y Sanciones.

Las infracciones prescribirán en el término de dos años. La prescripción de las sanciones quedará interrumpida mediante la iniciación del procedimiento sancionador.

Artículo 79. Relación con otros procesos.

- a) La responsabilidad administrativa es independiente de la responsabilidad penal y civil.
- b) En caso de sobreseimiento o absolución del encausado en el proceso penal, no se podrá alegar en el procedimiento administrativo la existencia del hecho principal sobre el cual hubiese recaído el sobreseimiento o la absolución, si la sentencia hubiese declarado su inexistencia. Esta disposición no se aplica cuando en la sentencia se ha decidido que el hecho no constituye hecho punible, o cuando el sobreseimiento, o la absolución, se ha fundado en que el agente está exento de responsabilidad penal.
- c) Después de la condena en el proceso penal, no se podrá negar en el procedimiento administrativo sancionador la existencia del hecho principal que constituye el hecho punible, ni impugnar la culpa del condenado. La sentencia dictada en juicio penal no será oponible al obligado por el hecho de otro, si aquél no tuvo ocasión de ejercer su defensa.

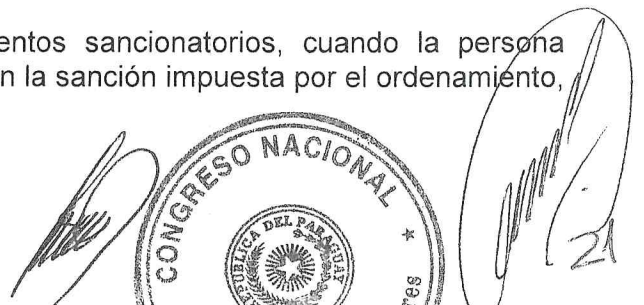
SECCIÓN SEGUNDA

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

Artículo 80. Etapas.

Los procedimientos administrativos sancionadores que se tramiten, deberán contemplar necesariamente las sucesivas etapas que garanticen a las partes intervinientes, el desarrollo efectivo de sus derechos. Necesariamente, deberán ser observadas las siguientes etapas: etapas de actuaciones previas al inicio sumarial, etapa inicial, etapa de tramitación y etapa final o conclusiva.

Será innecesaria la apertura de procedimientos sancionatorios, cuando la persona imputada acepte la falta y cumpla voluntariamente con la sanción impuesta por el ordenamiento, jurídico regulatorio.





CONGRESO NACIONAL

H. Cámara de Senadores

Artículo 81. Recursos y Efectos.

Contra la resolución que imponga una sanción, procederán los recursos administrativos previstos en la presente ley. Los recursos interpuestos contra actos administrativos que dispongan sanciones tendrán efectos suspensivos, salvo en aquellos casos en los que la Administración considere que su ejecución y eficacia inmediata sean imposterables por razones de interés público.

TÍTULO III

DE LA GESTIÓN Y TRÁMITES ELECTRÓNICOS

Artículo 82. Utilización de medios electrónicos.

Los trámites y actuaciones que conforman los procedimientos administrativos previstos en la presente ley, así como los actos y medidas administrativos que en virtud de la misma se dicten o dispongan, podrán realizarse por medios electrónicos.

Su validez jurídica y su valor probatorio serán idénticos a los de las actuaciones administrativas que se tramiten por medios convencionales.

Artículo 83. Reglamentación de uso de medios electrónicos.

La utilización de recursos tecnológicos para la gestión pública se conducirá conforme a la legislación específica que se sancione para regularlos o la reglamentación que en su defecto dicte el Poder Ejecutivo.

TÍTULO IV

DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS

Artículo 84. En los procedimientos administrativos iniciados antes de la fecha de vigencia de esta ley, se aplicarán los plazos de la misma a partir de dicha fecha, si con ello se reduce la duración del trámite.

Artículo 85. Derogación

Deróganse los artículos 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 de la Ley N° 4.679/2013 “DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS” y todas las disposiciones legales generales contrarias a esta ley.

Artículo 86. La presente ley entrará en vigencia un año después de su publicación en la Gaceta Oficial de la República. Dentro de dicho plazo, el Poder Ejecutivo dictará los reglamentos y disposiciones a que hubiere lugar y adoptará las medidas administrativas necesarias para la mejor aplicación de aquella.





CONGRESO NACIONAL

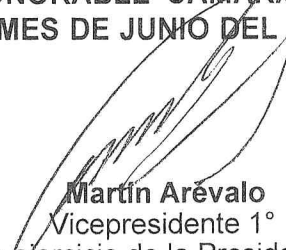
H. Cámara de Senadores

Artículo 87. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

DADA EN LA SALA DE SESIÓN VIRTUAL DE LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN, A LOS ONCE DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTE.


Hermelinda Alvarenga de Ortega
Secretaria Parlamentaria




Martín Arevalo
Vicepresidente 1°
En ejercicio de la Presidencia
H. Cámara de Senadores

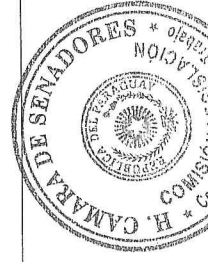


Honorable Cámara de Senadores

PROYECTO DE LEY: "DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS"

TEXTO CÁMARA DE SENADORES	PROPUESTA DE MODIFICACIONES PRESENTADA POR EL SENADOR FERNANDO SILVA FACETTI
<p>TITULO PRELIMINAR CAPITULO UNICO DISPOSICIONES GENERALES</p> <p>Artículo 1. Objeto. La presente Ley tiene por objeto:</p> <p>Establecer el régimen jurídico de los actos administrativos; Regular el procedimiento administrativo, incluyendo el régimen de los recursos administrativos y el procedimiento sancionador;</p> <p>Posibilitar la sustanciación de trámites y actuaciones administrativas por medios electrónicos.</p>	<p>TÍTULO PRELIMINAR CAPÍTULO ÚNICO DISPOSICIONES GENERALES</p> <p>Artículo 1. Objeto y Finalidad La presente Ley tiene por objeto:</p> <p>a) Establecer el régimen jurídico de los actos administrativos; b) Regular el procedimiento administrativo, incluyendo el régimen de los recursos administrativos y el procedimiento sancionador; c) Posibilitar la sustanciación de trámites y actuaciones administrativas por medios electrónicos.</p> <p>Las normas de la presente Ley tiene por finalidad proteger y garantizar los derechos, fundamentales o no, de las personas, la sujeción de las autoridades a la Constitución, a los preceptos del ordenamiento jurídico y al Derecho, para el eficaz cumplimiento de los fines públicos, el funcionamiento eficiente y democrático de la administración, y la observancia de los deberes del Estado y de los particulares.</p>
<p>Artículo 2. Ámbito de aplicación.</p> <p>1. Esta ley es aplicable a los procedimientos y actos administrativos que realicen:</p>	<p>Artículo 2. Ámbito de aplicación.</p> <p>Esta ley se aplicará a los procedimientos y actos administrativos que realicen:</p>

24



Los organismos de la Administración Central del Estado integrada por los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial; la Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la República, el Consejo de la Magistratura, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y los órganos del Estado de naturaleza análoga;

los gobiernos departamentales; las universidades nacionales; los entes autónomos, autónomos, autárquicos, los de regulación y de superintendencia; las entidades públicas de seguridad social; las empresas públicas y las empresas mixtas; las sociedades anónimas en las que el Estado sea socio mayoritario; las entidades financieras oficiales; la Banca Central del Estado, y las entidades de la Administración Pública Descentralizada;

d) las municipalidades.

2. A los efectos de la presente ley, se entenderá por:

Organismos: las instituciones individualizadas en el inciso a) del artículo 2 de la presente ley;

Entidades: las instituciones individualizadas en el inciso b) del artículo 2 de la presente ley;

Administración Pública: los organismos, entidades y municipalidades que realicen actos y procedimientos administrativos.

a) Los organismos de la Administración Central del Estado integrada por los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial; la Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la República, el Ministerio Público, el Consejo de la Magistratura, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y los órganos del Estado de naturaleza análoga;

b) los gobiernos departamentales; las universidades nacionales; los entes autónomos, autárquicos, los de regulación y de superintendencia; las entidades públicas de seguridad social; las empresas públicas y las empresas mixtas; las sociedades anónimas en las que el Estado sea socio mayoritario; las entidades financieras oficiales; la Banca Central del Estado, y las entidades de la Administración Pública Descentralizada;

SUPRIMIDO



<p style="text-align: center;">TITULO I</p>	<p style="text-align: center;">TITULO II RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS CAPITULO I ACTO ADMINISTRATIVO</p> <p>Artículo 3. Concepto de acto administrativo. Se entiende por acto administrativo, a los fines de esta ley, toda declaración unilateral efectuada por un órgano de la Administración Pública en ejercicio de funciones administrativas que produce efectos jurídicos de alcance general o particular.</p>
<p style="text-align: center;">IDEM</p>	<p>Artículo 4. Reglamentos y actos administrativos individuales.</p> <p>Los efectos de la presente ley, el acto administrativo se clasifica en:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Acto administrativo reglamentario o reglamento: que es el acto administrativo que produce efectos jurídicos de alcance general; 2) Acto administrativo individual: que es el acto administrativo que produce efectos jurídicos de alcance particular.



IDEM

artículo 5. Clases de reglamentos.

Los reglamentos se clasifican en:

Reglamento Interno, que va dirigido y obliga a los agentes de la Administración.

Reglamento externo, que contiene disposiciones obligatorias para la generalidad de los habitantes, sea en materias determinadas, sea dentro de circunscripciones territoriales delimitadas.

Reglamento de ejecución, dictado para el mejor cumplimiento de la ley. Detalla, precisa y aclara el contenido y alcance de la Ley para viabilizar o facilitar su aplicación. No puede crear obligaciones o prohibiciones nuevas sino proveer las disposiciones necesarias para el mejor cumplimiento de la ley.

IDEM

artículo 6. Competencia para dictar las diversas clases de reglamentos.

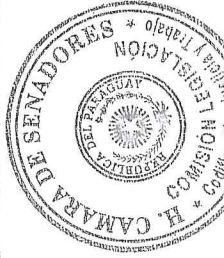
Tiene competencia para dictar reglamentos internos el Presidente de la República para los agentes de los órganos de la administración del Poder Ejecutivo, incluso para los entes descentralizados en materias que no estén especialmente regladas en sus respectivas leyes orgánicas. Tienen también competencia para dictar esta clase de reglamentos las autoridades que por ley o reglamento de organización administrativa o por facultad implícita en el orden jerárquico, pueden reglar la actuación de sus subordinados.

Los reglamentos externos sólo pueden ser dictados por la autoridad administrativa con expresa autorización legislativa, para materias y condiciones limitadas.

Los reglamentos de ejecución los dicta el Poder Ejecutivo en virtud de la disposición del artículo 238 inciso 3 de la Constitución.



CAPITULO II REQUISITOS DE REGULARIDAD Y VALIDEZ	
<p>Artículo 7. Legalidad. El acto debe estar positivamente autorizado por el ordenamiento jurídico.</p>	<p>IDEM</p>
<p>Artículo 8. Competencia. El acto debe ser emitido por el órgano facultado por el ordenamiento jurídico, a través de la autoridad competente.</p>	<p>Artículo 8°.- Competencia. El acto administrativo debe ser dictado por el órgano facultado por el ordenamiento jurídico, a través de la autoridad competente.</p>
<p>Artículo 9. Finalidad. El acto debe cumplirse con la finalidad que resulte de las normas que lo autorizan, sin poder perseguir otros fines, públicos o privados, distintos de los que justifican el acto. Las medidas que el acto involucre deben ser proporcionalmente adecuadas a aquella finalidad.</p>	<p>Artículo 9°.- Finalidad. El acto administrativo debe dictarse con la finalidad que resulte de las normas que lo autorizan, sin poder perseguir otros fines, públicos o privados, distintos de los que justifican el acto. Las medidas que el acto establezca deben ser proporcionalmente adecuadas a aquella finalidad.</p>
<p>Artículo 10. Presupuesto de hecho. El acto debe responder al hecho o circunstancia que ha tenido en vista el ordenamiento jurídico para autorizarlo.</p>	<p>IDEM</p>
<p>Artículo 11. Procedimiento. Habiendo procedimiento prescrito en la ley o reglamento, el acto debe ceñirse a él. En su efecto, la autoridad administrativa puede adoptar el procedimiento que estime más adecuado para satisfacer los intereses públicos en el marco del respeto a los derechos constitucionales de las personas.</p>	<p>IDEM</p>
<p>Artículo 12. Forma de los actos administrativos. El acto debe observar la forma prescrita en el ordenamiento jurídico. Se expresará por escrito, a menos que su naturaleza exija o permita otra forma distinta de expresión y constancia más adecuada.</p>	<p>Artículo 12. Forma de los actos administrativos. El acto debe observar la forma prescrita en el ordenamiento jurídico. Se expresará por escrito, a menos que su naturaleza exija o permita otra forma distinta de expresión y constancia más adecuada.</p>



acto escrito indicará la fecha y lugar en que es emitido, denominación del órgano del cual emana, nombre y firma de la autoridad interviniente.

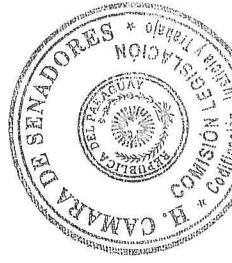
Cuando el acto administrativo es producido por medio de sistemas automatizados o electrónicos, debe garantizarse al administrado conocer el nombre y cargo de la autoridad que lo expide, además de adecuarse a los requisitos específicos que la reglamentación específica determine para ellos.

Cuando deban emitirse varios actos administrativos de la misma naturaleza, podrá ser empleada firma mecánica o electrónica o integrarse en un solo documento bajo una misma motivación, siempre que se individualice a los administrados sobre los que recae los efectos del acto. Para todos los efectos subsiguientes, los actos administrativos serán considerados como actos diferentes.

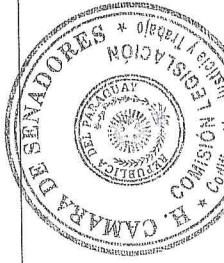
El acto escrito indicará la fecha y lugar en que es emitido, denominación del órgano del cual emana, nombre y firma de la autoridad interviniente. **Si el acto o medida se ha generado por medios automatizados o electrónicos, deberá el sistema indicar tal circunstancia, expresando el órgano al cual se imputa el acto o medida.**

Cuando el acto administrativo es producido por medio de sistemas automatizados o electrónicos, debe garantizarse al administrado conocer el nombre y cargo de la autoridad que lo expide, además de adecuarse a los requisitos específicos que la reglamentación específica determine para ellos.

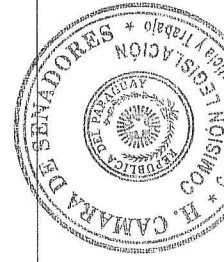
Cuando deban emitirse varios actos administrativos de la misma naturaleza, podrá ser empleada firma mecánica o electrónica o integrarse en un solo documento bajo una misma motivación, siempre que se individualice a los administrados sobre los que recae los efectos del acto. Para todos los efectos subsiguientes, los actos administrativos serán considerados como actos diferentes.



<p style="text-align: center;">CAPITULO III VALIDEZ Y EFICACIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO</p> <p>Artículo 13. Presunción de legitimidad y ejecutividad.</p> <p>El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su ejecutividad faculta a la administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que la ley o la naturaleza del acto exijan intervención judicial.</p>	<p style="text-align: center;">IDEM</p>
<p>Artículo 14. Eficacia.</p> <p>El acto administrativo individual adquiere eficacia desde el día siguiente al de su notificación al interesado o desde el día que dicho acto determine.</p> <p>El acto administrativo reglamentario adquiere eficacia desde el día siguiente al de su publicación o desde el día que dicho acto determine.</p> <p>La reglamentación determinará los medios, requisitos y formalidades de las notificaciones y publicaciones.</p>	<p style="text-align: center;">IDEM</p>
<p>Artículo 15. Ejecutoriedad.</p> <p>Los actos administrativos causan inmediata ejecutoriedad, salvo en aquellos casos en que la disposición establezca lo contrario o necesiten aprobación o autorización.</p>	<p style="text-align: center;">IDEM</p>
<p>Artículo 16. Fuerza Ejecutiva.</p> <p>El instrumento en que conste el acto administrativo, otorgado en debida forma por el órgano competente, es instrumento público y tiene fuerza ejecutiva.</p>	<p style="text-align: center;">IDEM</p>
<p>Artículo 17. Prescripción Liberatoria.</p> <p>Las acciones provenientes de los actos administrativos creadores de obligaciones a cargo de los administrados, prescribirán en el término de cinco (5) años, salvo que en leyes especiales se establezcan plazos diferentes.</p> <p>a interrupción y suspensión de los plazos de prescripción se rigen por el Código Civil.</p>	<p style="text-align: center;">IDEM</p>



<p>IDEM</p>	<p>Artículo 18. Caducidad.</p> <p>Los derechos y obligaciones regidos por el Derecho Administrativo pueden extinguirse también por caducidad, cuando el acto administrativo que los concede o establece, así lo prescribe, o cuando la extinción se produce ipso jure por disposición de la ley, como el vencimiento de una concesión o del periodo legal de un cargo público.</p> <p>El tiempo de caducidad no se suspende ni interrumpe.</p>
<p>IDEM</p>	<p style="text-align: center;">CAPITULO IV</p> <p style="text-align: center;">SANCIÓN DE LAS IRREGULARIDADES DEL ACTO ADMINISTRATIVO</p> <p>Artículo 19. Nulidad y anulabilidad.</p> <p>El acto administrativo puede ser nulo o anulable, según sea la gravedad de la trasgresión de las normas a que está sujeto.</p>
<p>IDEM</p>	<p>Artículo 20. Nulidad.</p> <p>Es nulo el acto administrativo en los siguientes casos:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sanción expresa de nulidad para el caso, estatuida en la ley b. Acto administrativo dictado contra expresa prohibición de la ley. c. Inexistencia del presupuesto de hecho, falta de causa o falsa causa. d. Actos que vulneren la Constitución o regulen materias reservadas a las leyes. e. Incompetencia manifiesta por razón de la materia o del territorio. f. Inobservancia total y absoluta del procedimiento exigido en la ley, especialmente las relativas a la defensa del particular afectado; g. Inobservancia total y absoluta de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados. h. Error manifiesto de hecho o de derecho, dolo o violencia, en cuanto hubiese determinado el pronunciamiento o desviado el acto de su correcta finalidad. <p>· Cuando el acto constituya un hecho punible o fuera consecuencia de éste</p>



<p>Artículo 21. Anulabilidad.</p> <p>Es anulable el acto administrativo irregular que no esté incurrido en las causales de nulidad establecidas en el artículo anterior y sea subsanable sin grave lesión del ordenamiento jurídico.</p> <p>No obstante, el defecto de forma o de procedimiento solo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados.</p> <p>La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas sólo implicará la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo.</p>	<p>IDEM</p>
<p>Artículo 22. Revisión de oficio de los actos nulos.</p> <p>Los actos que incurren en las causales de nulidad establecidas en el artículo 20 carecen de estabilidad y no pueden válidamente generar derechos subjetivos frente al orden público o a la necesidad de vigencia de la legalidad. Podrán ser revocados o sustituidos por razones de ilegitimidad aun en sede administrativa.</p>	<p>IDEM</p>
<p>Artículo 23. Revisión de oficio de actos anulables que no generen derechos subjetivos o no afecten intereses legítimos.</p> <p>Los actos anulables que no generen derechos subjetivos o no afecten intereses legítimos podrán ser revocados en sede administrativa en cualquier momento, en todo o en parte, por la misma autoridad que los dictó, o por el respectivo superior jerárquico.</p>	<p>Artículo 23. Revisión de oficio de actos anulables que no generen derechos subjetivos o no afecten intereses legítimos.</p> <p>Los actos anulables que no generen derechos subjetivos o no afecten intereses legítimos podrán ser revocados y subsanados de oficio en sede administrativa en cualquier momento, en todo o en parte, por la misma autoridad que los dictó, o por el respectivo superior jerárquico.</p>



<p>Artículo 24. Declaración judicial de nulidad de actos anulables.</p> <p>Si el acto anulable estuviere firme y consentido y hubiere generado derechos subjetivos a favor de particulares que se estén cumpliendo, sólo se podrá impedir su subsistencia y la de los efectos aún pendientes mediante declaración judicial de nulidad demandada por la Administración que emitió el acto.</p> <p>Será competente para declarar la nulidad de los actos anulables que demande la Administración, el Tribunal de Cuentas de la República.</p>	<p>Artículo 24. Declaración judicial de nulidad de actos anulables.</p> <p>Si el acto anulable estuviere firme y consentido y hubiere generado derechos subjetivos a favor de particulares que se estén cumpliendo, sólo se podrá impedir su subsistencia y la de los efectos aún pendientes mediante declaración judicial de nulidad demandada por la Administración que emitió el acto.</p> <p>Será competente para declarar la nulidad de los actos anulables que demande la Administración, el juez en lo civil y comercial de la jurisdicción del domicilio de la Administración.</p>
<p>IDEM</p>	<p>Artículo 25. Saneamiento del acto anulable.</p> <p>El acto administrativo afectado por alguna causal de anulabilidad puede ser saneado mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ratificación por el órgano superior, cuando el acto hubiere sido emitido con incompetencia en razón de grado y siempre que la avocación, delegación o sustitución fueren procedentes. • confirmación por el órgano que dictó el acto, subsanando el vicio que lo afecte. • los efectos del saneamiento se retrotraerán a la fecha de emisión del acto objeto de ratificación o confirmación.

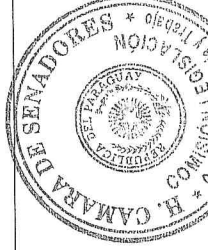


<p>IDEM</p>	<p>Artículo 26. Errores materiales.</p> <p>La autoridad puede corregir en cualquier momento los errores de escritura, de operaciones aritméticas y demás errores notorios del acto administrativo, de oficio o a petición de parte.</p>
<p>IDEM</p>	<p>CAPITULO V</p> <p>REVOCACIÓN DE LOS ACTOS REGULARES</p> <p>Artículo 27. Revocación de actos administrativos discrecionales.</p> <p>Se revocable el acto administrativo cuando fuere discrecional y de ejecución sucesiva o continuada en los siguientes casos:</p> <ul style="list-style-type: none"> Por cambio de las circunstancias de hecho; Por cambio de nueva tecnología aplicable en la materia; Por cambio de la ley bajo la cual se produjo el acto; Por cambio del criterio de la autoridad respecto del mejor modo de satisfacer las necesidades públicas. <p>En todos estos casos la revocación sólo tiene efecto para el futuro.</p>

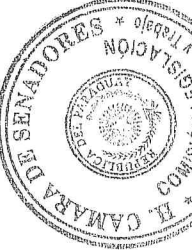
34



<p>IDEM</p>	<p>Artículo 28. Actos irrevocables.</p> <p>Es irrevocable el acto administrativo reglado que genere derechos subjetivos o afecte intereses legítimos, tanto si es de ejecución única como de ejecución sucesiva o continuada.</p> <p>Es irrevocable el acto administrativo discrecional de ejecución única que genere derechos subjetivos o afecte intereses legítimos.</p>
<p>IDEM</p>	<p>Artículo 29. Revocación con indemnización.</p> <p>Cuando el acto administrativo sea irrevocable según las reglas precedentes, la autoridad puede disponerlo para impedir o eliminar graves perjuicios al bien público, indemnizando en todo caso al particular el daño por la revocación.</p>
<p>IDEM</p>	<p>Artículo 30. Racionalidad de la revocación.</p> <p>Si la facultad para la revocación del acto es discrecional, la autoridad debe ejercerla razonablemente, atendiendo tanto a la causa como a la finalidad.</p>
<p>IDEM</p>	<p>Artículo 31. Revocación a favor del particular.</p> <p>Pueden ser revocados los actos considerados irrevocables cuando la revocación es a favor del particular afectado, siempre que no concurran condiciones que lo impidan como las siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Que no se trate de facultades regladas de las que no puede apartarse la autoridad administrativa. 2. Que lo que se concede con la revocación a uno, no se le niegue a otro. 3. Que la revocación no afecte derechos de terceros.

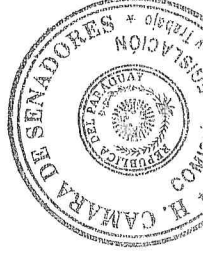


<p>Artículo 32. Reglas no aplicables.</p> <p>as precedentes reglas no tienen aplicación en el proceso de formación del acto administrativo que puede ser revocado, modificado o confirmado en las diversas instancias.</p>	<p>IDEM</p>
<p>Artículo 33. Aplicación de principios jurídicos.</p> <p>oda actuación administrativa se sustenta fundamentalmente en los principios expuestos en el presente artículo, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo.</p> <p>os principios señalados servirán también de criterio interpretativo para resolver las cuestiones que puedan suscitarse en la aplicación de las reglas de procedimiento, como parámetros para la generación de otras disposiciones administrativas de carácter general, y para suplir los vacíos en el ordenamiento administrativo. La relación de principios enunciados no tiene carácter taxativo ni limitativo. Estos son:</p> <p>a) Principio de la legalidad. Los actos administrativos se ajustarán a los procedimientos que establezca el ordenamiento jurídico.</p> <p>b) Respeto a los derechos fundamentales de las personas La substanciación de cualquier procedimiento administrativo deberá respetar los derechos fundamentales de las personas previstos en la Constitución y en las leyes. En todo procedimiento administrativo del cual pudiera derivarse una sanción o la revocación o cancelación de un acto administrativo que haya otorgado un derecho subjetivo a los administrados se garantizará el derecho a la defensa.</p>	<p>TITULO III</p> <p>PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO</p> <p>CAPÍTULO I</p> <p>PRINCIPIOS DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO</p> <p>Artículo 33. Aplicación de principios jurídicos.</p> <p>Toda actuación administrativa se sustenta fundamentalmente en los principios expuestos en el presente artículo, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo.</p> <p>Los principios señalados servirán también de criterio interpretativo para resolver las cuestiones que puedan suscitarse en la aplicación de las reglas de procedimiento, como parámetros para la generación de otras disposiciones administrativas de carácter general, y para suplir los vacíos en el ordenamiento administrativo. La relación de principios enunciados no tiene carácter taxativo ni limitativo. Estos son:</p> <p>a) Principio de la legalidad. Los actos y procedimientos administrativos se ajustarán al ordenamiento jurídico.</p> <p>b) Respeto a los derechos fundamentales de las personas La substanciación de cualquier procedimiento administrativo deberá respetar los derechos fundamentales de las personas previstos en la Constitución y en las leyes. En todo procedimiento administrativo del cual pudiera derivarse una sanción o la revocación o cancelación de un acto administrativo que haya otorgado un derecho subjetivo a los administrados se garantizará el derecho a la defensa.</p>

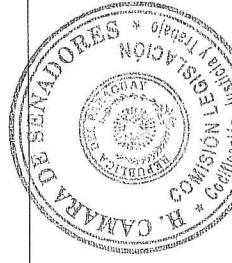


- c) Principio de escrituración. El procedimiento administrativo y los actos administrativos a los cuales da origen se expresarán por escrito en formatos electrónicos, a menos que su naturaleza exija o permita otra forma más adecuada de expresión y constancia.
- d) Principio de gratuidad. Todo el procedimiento administrativo y las actuaciones derivadas del mismo serán gratuitos para los interesados. Los particulares sólo estarán obligados a realizar prestaciones personales o patrimoniales en favor de la Administración, cuando la Ley expresamente lo establezca.
- e) Principio de celeridad y economía procesal. Los procedimientos administrativos se desarrollarán con economía, simplicidad y celeridad, evitando la realización de trámites y diligencias innecesarias o que constituyan mero formalismo, a fin de alcanzar una decisión en tiempo razonable, sin que ello vulnere el ordenamiento jurídico.
- f) Principio de simplicidad. Los trámites establecidos por la autoridad administrativa deberán ser sencillos, debiendo eliminarse toda complejidad innecesaria. Los requisitos exigidos deberán ser racionales y proporcionales a los fines que se persigue cumplir.
- g) Principio de **Oficiosidad**. Sin perjuicio del impulso que realicen las partes, el procedimiento administrativo será impulsado de oficio por el funcionario responsable. El funcionario responsable de cada proceso podrá disponer de oficio el practicamiento de actuaciones, diligenciamientos de prueba, como cualquier otro acto de impulso procesal que no haya sido ofrecido ni requerido por las partes.
- h) Principio de objetividad. Las autoridades administrativas deberán actuar sin ninguna clase de discriminación hacia los administrados, tanto en la substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte, otorgándoles tratamiento y tutela igualitarios frente al procedimiento, resolviendo conforme al ordenamiento jurídico y con atención al interés general.

- c) Principio de escrituración. El procedimiento administrativo y los actos administrativos a los cuales da origen se expresarán por escrito en formatos impresos o electrónicos, a menos que su naturaleza exija o permita otra forma más adecuada de expresión y constancia.
- d) Principio de gratuidad. Todo el procedimiento administrativo y las actuaciones derivadas del mismo serán gratuitos para los interesados. Los particulares sólo estarán obligados a realizar prestaciones personales o patrimoniales en favor de la Administración, cuando la Ley expresamente lo establezca.
- e) Principio de celeridad y economía procesal. Los procedimientos administrativos se desarrollarán con economía, simplicidad y celeridad, evitando la realización de trámites y diligencias innecesarias o que constituyan mero formalismo, a fin de alcanzar una decisión en tiempo razonable, sin que ello vulnere el ordenamiento jurídico.
- f) Principio de simplicidad. Los trámites establecidos por la autoridad administrativa deberán ser sencillos, debiendo eliminarse toda complejidad innecesaria. Los requisitos exigidos deberán ser racionales y proporcionales a los fines que se persigue cumplir.
- g) Principio de Oficialidad. Sin perjuicio del impulso que realicen las partes, el procedimiento administrativo será impulsado de oficio por el funcionario responsable. El funcionario responsable de cada proceso podrá disponer de oficio el practicamiento de actuaciones, diligenciamientos de prueba, como cualquier otro acto de impulso procesal que no haya sido ofrecido ni requerido por las partes.
- h) Principio de objetividad. Las autoridades administrativas deberán actuar sin ninguna clase de discriminación hacia los administrados, tanto en la substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte, otorgándoles tratamiento y



<p>tutela igualitarios frente al procedimiento, resolviendo conforme al ordenamiento jurídico y con atención al interés general.</p> <p>Principio del informalismo. Las normas de procedimiento deben ser interpretadas en forma favorable a la admisión y decisión final de las pretensiones de los administrados, de modo que sus derechos e intereses no sean afectados por la exigencia de aspectos formales que puedan ser subsanados dentro del procedimiento, siempre que el informalismo no afecte derechos de terceros o el interés público.</p> <p>Principio de transparencia y de publicidad. El procedimiento, así como toda actuación administrativa, se realizarán con transparencia, de manera que permitan y promuevan el conocimiento y fundamentos de las decisiones que se adopten en los mismos. En consecuencia, salvo las excepciones establecidas en el ordenamiento jurídico, son públicos los actos de los órganos de la Administración y los documentos que le sirvan de sustento o complemento directo o esencial.</p> <p>Principio de razonabilidad y proporcionalidad. Todas las decisiones de la autoridad administrativa deben ajustarse a los límites de la facultad atribuida y mantener la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido. Las competencias administrativas sólo pueden ser válidamente ejercidas en la extensión e intensidad proporcionales a lo que sea realmente demandado para el cumplimiento de la finalidad del interés público a que están unidas.</p>	<p>i) Principio del informalismo. Las normas de procedimiento deben ser interpretadas en forma favorable a la admisión y decisión final de las pretensiones de los administrados, de modo que sus derechos e intereses no sean afectados por la exigencia de aspectos formales que puedan ser subsanados dentro del procedimiento, siempre que el informalismo no afecte derechos de terceros o el interés público.</p> <p>j) Principio de transparencia y de publicidad. El procedimiento, así como toda actuación administrativa, se realizarán con transparencia, de manera que permitan y promuevan el conocimiento y fundamentos de las decisiones que se adopten en los mismos. En consecuencia, salvo las excepciones establecidas en el ordenamiento jurídico, son públicos los actos de los órganos de la Administración y los documentos que le sirvan de sustento o complemento directo o esencial.</p> <p>k) Principio de razonabilidad y proporcionalidad. Todas las decisiones de la autoridad administrativa deben ajustarse a los límites de la facultad atribuida y mantener la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido. Las competencias administrativas sólo pueden ser válidamente ejercidas en la extensión e intensidad proporcionales a lo que sea realmente demandado para el cumplimiento de la finalidad del interés público a que están unidas.</p>
<p>Artículo 34. Derecho de las personas en los procedimientos administrativos.</p> <p>Las personas, en sus relaciones con la Administración, tienen derecho a:</p> <p>1) conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados, y obtener copia de los documentos que rolan en el expediente y la devolución de los originales, salvo que por mandato legal o reglamentario éstos deban ser acompañados a los autos, a su costa;</p>	<p>IDEM</p>



identificar a las autoridades y al personal al servicio de la Administración, bajo ya responsabilidad se tramiten los procedimientos;

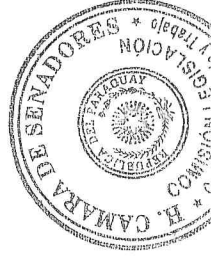
eximirse de presentar documentos que no correspondan al procedimiento, o que ya encuentren en poder de la Administración;

acceder a las actuaciones en los términos previstos en la ley;

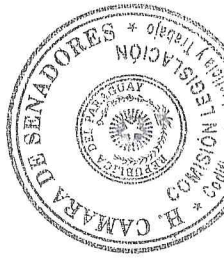
ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y funcionarios, que habrán facilitarles el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. Los actos instrucción que requieran la intervención de los interesados habrán de practicarse en la forma que resulte más cómoda para ellos y sea compatible, en la medida de lo posible, con las obligaciones laborales o profesionales,

exigir las responsabilidades de la Administración Pública y del personal a su servicio, cuando así corresponda legalmente;

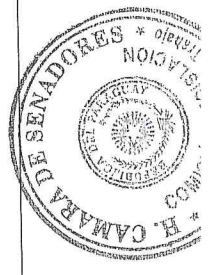
obtener información acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos, actuaciones o solicitudes que se propongan realizar, y cualesquiera otros que les reconozcan la Constitución y las leyes.



<p>IDEM</p>	<p>Artículo 35. Procedimientos especiales. Los procedimientos administrativos que tengan regímenes especiales en las leyes seguirán las disposiciones establecidas en los capítulos III y V del presente Título les serán aplicables sólo en forma supletoria.</p> <p>El capítulo IV referido al régimen recursivo se aplicará obligatoriamente a todo procedimiento.</p>
<p>IDEM</p>	<p>CAPITULO II EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO</p> <p>Artículo 36. Formación del expediente. El procedimiento administrativo deberá constar en un expediente escrito en formatos impresos o electrónicos, a menos que su naturaleza exija o permita otra forma más adecuada de expresión y constancia.</p> <p>En el expediente escrito se asentarán los documentos presentados por los interesados, por terceros y otros órganos públicos, con expresión de la fecha y hora de su recepción. Asimismo, se incorporarán las actuaciones y los documentos y resoluciones que el órgano administrativo remita a los interesados, a terceros o a otros órganos públicos y las notificaciones y comunicaciones a que estas den lugar, con expresión de la fecha y hora de su envío.</p>
<p>Artículo 37. Información general obligatoria.</p> <p>Los organismos y entidades sometidos a la presente Ley, (...) difundirán (...) por los medios de publicación que se establezcan en la reglamentación respectiva, datos referidos a su estructura orgánica y funcional, como así detalles en relación a las prestaciones públicas que le corresponden, con claridad y precisión.</p>	<p>Artículo 37. Información general obligatoria.</p> <p>Los organismos y entidades sometidos a la presente Ley prepararán y difundirán al público, mediante los medios de publicación que se establezcan en la reglamentación, los reglamentos e instrucciones referentes a las estructuras, funciones, comunicaciones y jerarquías de sus dependencias. Asimismo, en todas las dependencias al servicio del público, se informará a éste por los medios adecuados, sobre los fines, competencias y funcionamiento de sus distintos órganos y servicios.</p> <p>Igualmente informarán a los interesados sobre los métodos y procedimientos vigentes en la tramitación o consideración de su caso.</p>



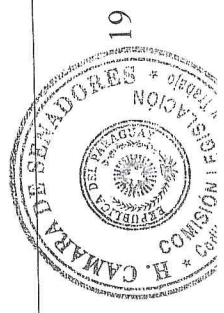
<p>IDEM</p>	<p>IDEM</p>
<p>Artículo 38. Tramitación expeditiva.</p> <p>Los órganos administrativos utilizarán procedimientos expeditivos en la tramitación de aquellos asuntos que así lo justifiquen. Cuando sean idénticos los motivos y fundamentos de las resoluciones, se podrán usar medios de producción en serie, siempre que no se violen las garantías jurídicas de los interesados.</p>	<p>CAPITULO III</p> <p>PROCEDIMIENTO ORDINARIO ADMINISTRATIVO</p> <p>Artículo 39. Procedimiento no formal.</p> <p>El procedimiento ordinario administrativo no es formal, en el sentido que a continuación se expresa:</p> <p>1) Si no existe procedimiento especial prescrito en la ley, la autoridad llamada a ejecutarla puede elegir el procedimiento más adecuado, atendiendo a la celeridad, eficacia y razonabilidad de la ejecución, dentro del marco de las disposiciones establecidas en la presente ley.</p> <p>2) Puede obviar formas o etapas del procedimiento, incluso resolver con la mera fórmula "como se pide" o "no ha lugar" si la cuestión planteada es simple y de toda evidencia en cuanto a los hechos alegados y el derecho aplicable.</p> <p>3) Las deficiencias formales no darán lugar a nulidad siempre que sean subsanables, tratándose el procedimiento en lo que fuere posible.</p>
<p>IDEM</p>	<p>Artículo 40. Parte interesada.</p> <p>Es parte interesada, legitimada para el procedimiento administrativo:</p> <p>a) La que invoque un derecho o impugne una obligación en un acto administrativo dictado o solicitado para su caso particular (derecho subjetivo);</p> <p>b) La que solicite la declaración de un derecho a su favor o la exención de una obligación, de una disposición de carácter general que eventualmente le sea aplicable (interés legítimo);</p> <p>c) La que sea o pueda ser afectada por la decisión de la autoridad al resolver sobre derechos u obligaciones de terceros;</p> <p>b) La que recurre a la instancia administrativa como procedimiento previo, para promover demanda ordinaria contra la Administración.</p>



4

<p>Artículo 41. Capacidad de obrar.</p> <p>en capacidad para actuar en el procedimiento administrativo las personas físicas y jurídicas.</p> <p>Las asociaciones que carezcan de personalidad jurídica podrán actuar en cuestiones que afecten directamente, o en representación de sus miembros o asociados involucrados en dichas cuestiones de interés gremial o colectivo.</p>	<p>IDEM</p>
<p>Artículo 42. Actuación por sí o por poder.</p> <p>La parte interesada podrá ejercer por sí misma sus derechos ante la Administración pública.</p> <p>Para ejercerla mediante mandatario, debe hacerlo por intermedio de abogado matriculado.</p> <p>La parte interesada podrá otorgar poder en escritura pública o por una autorización con firma autenticada por escribano público u otorgada por acta en el expediente administrativo respectivo.</p>	<p>Artículo 42. Actuación por sí o por poder.</p> <p>La parte interesada podrá ejercer (...) sus derechos ante la Administración por sí misma o mediante mandatario, que deberá ser abogado matriculado. En este caso, la parte interesada podrá otorgar poder por escritura pública, autorización por certificación de firma por escribano público o mediante acta, extendida en el expediente administrativo.</p>
<p>Artículo 43. Notificaciones.</p> <p>La resolución puede ser notificada directamente al interesado con la firma del mismo en el expediente, por cédula de notificación, por correo con aviso de retorno, telegrama o por medios electrónicos, conforme a la reglamentación que se dicte para el efecto. En caso de ser ignorado el domicilio, se citará a la parte interesada por edictos que se publicarán en los medios que determine la reglamentación, bajo apercibimiento de que, en caso de no comparecer con justa causa, se proseguirá el procedimiento en rebeldía.</p>	<p>IDEM</p>
<p>Artículo 44. Los plazos.</p> <p>Los plazos serán obligatorios para los interesados y la Administración.</p> <p>Cuando no se hubiere establecido plazo especial para la realización de trámites, notificaciones y citaciones, cumplimiento de intimaciones y emplazamientos, contestación y traslados, vistas e informes, aquel será de diez (10) días.</p> <p>Antes del vencimiento de un plazo podrá la Administración de oficio o a pedido del interesado disponer su ampliación, por el tiempo razonable que fijare mediante resolución fundada y siempre que no resulten perjudicados derechos de terceros.</p>	<p>IDEM</p>

42

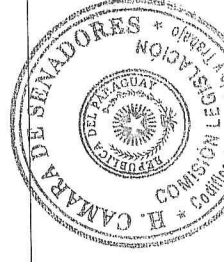


<p>Artículo 45. Cómputo de plazos.</p> <p>Los términos en días se computarán desde el día siguiente de la notificación del acto administrativo. Sólo se contarán los días hábiles, salvo disposición legal en contrario o habilitación resuelta de oficio o petición de parte. En la instancia administrativa se imputarán como días hábiles los días sábados sólo cuando la administración esté abierta público en esos días.</p> <p>Los términos de meses y años se computan desde el día siguiente a la fecha de su notificación, hasta la medianoche del día de la misma fecha del calendario, incluidos los días hábiles, sin consideración al número de días del mes o del año. Si en el mes de vencimiento el término no hubiere día correspondiente al de su comienzo, el término vencerá el último día del mes de vencimiento.</p>	<p>IDEM</p>
<p>Artículo 46. Iniciación del procedimiento.</p> <p>El procedimiento podrá ser iniciado por la parte interesada o de oficio por la autoridad competente.</p> <p>Artículo 47. Presentación.</p> <p>El escrito de presentación del interesado expresará su nombre y apellido, domicilio, el carácter en que se presenta, la autoridad a la que se dirige y la exposición sucinta de los hechos y derechos que invoca.</p> <p>Si existe prueba documental que respalde su derecho, la acompañará o indicará la oficina o lugar en que se encuentra. Si desea su desglose y devolución presentará copias que serán autenticadas por el encargado de la mesa de entradas o de la recepción del documento o por el funcionario que intervenga en el trámite.</p>	<p>IDEM</p> <p>Artículo 47. Presentación.</p> <p>El escrito de presentación del interesado expresará su nombre y apellido, domicilio, el carácter en que se presenta, la autoridad a la que se dirige y la exposición sucinta de los hechos y derechos que invoca.</p> <p>Si existe prueba documental que respalde su derecho, la acompañará o indicará la oficina o lugar en que se encuentra. Si desea su desglose y devolución presentará copias que serán autenticadas por el encargado de la mesa de entradas o de la recepción del documento o por el funcionario que intervenga en el trámite.</p>

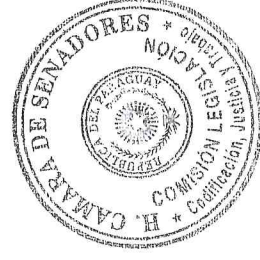


<p>Artículo 48. Información y orientación. El interesado lo necesita, los funcionarios de la oficina competente para atender la solicitud, le informarán y orientarán sobre la corrección de su escrito, la autoridad competente y los demás requisitos que deben observarse.</p>	<p>IDEM</p>
<p>Artículo 49. Impulsión del procedimiento. El procedimiento se impulsará a instancia del interesado o de oficio por la autoridad en todo lo conducente al objeto perseguido.</p>	<p>Artículo 49. Impulso del procedimiento. El procedimiento se impulsará a instancia del interesado o de oficio por la autoridad en todo lo conducente al objeto del mismo.</p>
<p>Artículo 50. Pruebas. Si los hechos alegados por el interesado no hubiesen sido suficientemente justificados con las pruebas que haya acompañado o indicado en su primera presentación, la autoridad le emplazará para que lo haga por los medios, plazos y formas que le serán señalados. Sin perjuicio de las pruebas aportadas, la Administración podrá ordenar todas aquellas diligencias que considere pertinentes.</p>	<p>IDEM</p>
<p>Artículo 51. Colaboración. Los órganos de la Administración en general deberán colaborar con la autoridad interviniente proporcionando sin tardanza los informes, certificados u otros documentos que ésta les solicite. La comunicación de dicha autoridad con los demás órganos se hará directamente, sin necesidad de recurrir a la autoridad superior para que ésta retransmita el pedido.</p>	<p>IDEM</p>
<p>Artículo 52. Pronunciamiento en el procedimiento ordinario. La resolución que ponga fin al procedimiento ordinario decidirá las cuestiones planteadas por los interesados y será fundada. La resolución debe ser pronunciada por escrito y motivada con la mención de los hechos probados (motivados) y cita de las disposiciones</p>	<p>IDEM</p>

44



<p>regales aplicables (justificación). La Administración Pública está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos, cualquiera sea su forma de iniciación.</p> <p>plazo máximo para dictar resolución en el procedimiento ordinario será de tres (3) meses desde la iniciación del procedimiento, salvo plazo distinto, establecido por ley.</p> <p>el caso de que el hecho y el derecho invocados por el peticionante sean manifiestos, la solución puede simplemente expresarse su conformidad con la petición, en la inteligencia que podrán ser demostrados obviamente sus fundamentos si la misma resolución llega a ser recurrida.</p>	
<p>artículo 53. Silencio de la Administración.</p> <p>en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, si no se dictare la resolución definitiva dentro de los plazos establecidos en la ley se tendrá por denegada la petición, a los efectos de interponer los recursos administrativos respectivos.</p>	<p>IDEM</p>
<p>artículo 54. De la Renuncia.</p> <p>todo interesado podrá desistir de su solicitud, o cuando ello no esté prohibido por el ordenamiento jurídico, renunciar a sus derechos. Si el escrito de iniciación se hubiera formulado por dos o más interesados, el desistimiento o la renuncia solo afectará a aquellos que lo hubiesen formulado.</p>	<p>IDEM</p>
<p>artículo 55. Medidas Cautelares.</p> <p>la autoridad administrativa podrá dictar y disponer las medidas cautelares que considere necesarias para preservar la salud, la seguridad pública, el orden o cualquier otra razón de interés general.</p> <p>podrá igualmente disponerlas para asegurar el resultado de los procedimientos conducidos por la Administración sustanciados de oficio o por impulso de los administrados.</p>	<p>IDEM</p>



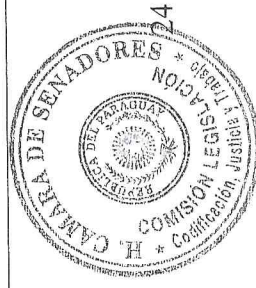
45

<p>Administración podrá hacer efectivas y ejecutar las medidas cautelares que dicte o ponga por sus propios medios, salvo los casos donde la ley requiera intervención y autorización judicial expresa.</p>	
<p>artículo 56. Pronunciamiento en peticiones que no requieran substanciación.</p> <p>falta de disposición expresa, toda petición, presentación o solicitud de naturaleza administrativa dirigida por los particulares a los órganos de la administración pública que no requiera substanciación, deberá ser resuelta dentro de los veinte (20) días siguientes a su presentación o a la fecha posterior en la que el interesado hubiere cumplido los requisitos legales exigidos.</p> <p>los efectos previstos en el presente artículo, la reglamentación de esta ley determinará -cuáles son las peticiones que no requieren de substanciación.</p>	<p>IDEM</p>
<p>artículo 57. Normas procesales supletorias.</p> <p>on de aplicación supletoria en el procedimiento ordinario administrativo las normas del Código Procesal Civil, siempre que no sean incompatibles con las de la presente ley que se consideraran especiales en materia administrativa.</p>	<p>IDEM</p>
<p>CAPITULO IV</p> <p>PROCEDIMIENTO DE LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS</p> <p>Sección Primera</p> <p>Disposiciones Generales</p> <p>artículo 58. Procedencia.</p> <p>os recursos administrativos proceden contra toda clase de resolución de carácter definitivo o actos administrativos individuales que tengan carácter equivalente, siempre que dichos actos administrativos a criterio de los interesados afecten, lesionen o pudieren causar perjuicio a sus derechos subjetivos o intereses legítimos.</p>	<p>IDEM</p>



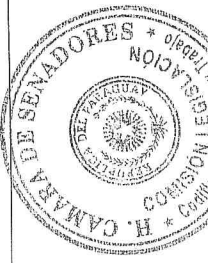
46

<p>ra efectos de esta Ley, se entenderán por resoluciones definitivas o actos administrativos e tengan carácter equivalente a aquellos actos administrativos que pongan fin a una tuación administrativa. régimen recursivo previsto en el presente capítulo será común y obligatorio para todos s procedimientos administrativos.</p>	
<p>artículo 59. Improcedencia. o proceden recursos administrativos contra los reglamentos. ampoco proceden contra los actos administrativos de carácter preparatorio o de mero ámite, salvo que se trate de actos que determinen la imposibilidad de continuar el ocedimiento o produzcan indefensión.</p>	<p>IDEM</p>
<p>artículo 60. Forma de Presentación. os recursos se presentarán de manera fundada, cumpliendo con los requisitos y ormalidades, en los plazos que establece la presente Ley.</p>	<p>IDEM</p>
<p>artículo 61. Efectos de la interposición de recursos administrativos. a interposición de cualquier recurso no suspenderá la ejecución del acto impugnado, salvo e una norma expresa establezca lo contrario. No obstante, el órgano administrativo ompetente para resolver el Recurso, podrá suspender la ejecución del acto recurrido, de ficio o a solicitud del recurrente, cuando: <ul style="list-style-type: none">) Dicha ejecución pueda causar un daño de difícil o imposible reparación al recurrente o un daño proporcionalmente mayor que los perjuicios que la suspensión le acarrearía al Estado;) cuando se alegue y acredite prima facie un vicio grave que acarree la nulidad del acto impugnado, y) por razones de interés público. </p>	<p>IDEM</p>

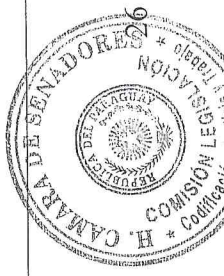


47

<p>Artículo 62. Terceros afectados.</p> <p>con la impugnación de una resolución se afectasen derechos subjetivos o intereses legítimos de terceras personas, individuales o colectivas, la autoridad administrativa deberá hacerles conocer la correspondiente impugnación.</p>	<p>IDEM</p>
<p>Artículo 63. Resolución.</p> <p>Los recursos administrativos previstos en la presente Ley, serán resueltos confirmando o revocando total o parcialmente la resolución impugnada, o en su caso, desestimando el recurso si éste estuviere interpuesto fuera de término, no cumpliéndose las formalidades señaladas expresamente en disposiciones aplicables o si no cumpliéndose los requisitos de legitimación respectivos.</p> <p>La resolución expondrá en forma motivada los aspectos de hecho y de derecho en los que se fundare, y se referirá siempre a las pretensiones formuladas por el recurrente, sin que en ningún caso pueda agravarse su situación inicial como consecuencia exclusiva de su propio recurso.</p>	<p>IDEM</p>
<p>Artículo 64. Prueba.</p> <p>La autoridad administrativa, de oficio o a pedido de parte, podrá determinar la apertura de un término de prueba realizando al efecto las diligencias correspondientes.</p> <p>El plazo para la prueba, en esta instancia, será determinado a criterio de la autoridad conforme a las circunstancias y conforme a la reglamentación de la presente Ley.</p> <p>El término de prueba procederá sólo cuando haya nuevos hechos o documentos que no estén considerados en el expediente. Los recursos administrativos se ajustarán al procedimiento general establecido en la presente Ley.</p>	<p>Artículo 64. Prueba.</p> <p>La autoridad administrativa, de oficio o a pedido de parte, podrá determinar la apertura de un término de prueba y ordenara la realización de las diligencias correspondientes.</p> <p>El plazo para la prueba en esta instancia, será determinado a criterio de la autoridad, conforme a las circunstancias y conforme a la reglamentación de la presente Ley.</p> <p>El término de prueba procederá sólo cuando haya nuevos hechos o documentos que no estén considerados en el expediente. Los recursos administrativos se ajustarán al procedimiento general establecido en la presente Ley.</p>

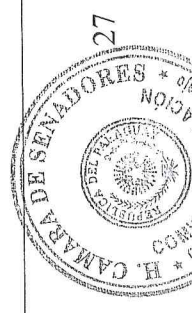


<p style="text-align: center;">SECCIÓN SEGUNDA RECURSO DE RECONSIDERACIÓN</p> <p>Artículo 65. Plazo.</p> <p>recurso de reconsideración procede contra las resoluciones definitivas o actos administrativos que tengan carácter equivalente y deberá ser interpuesto por el interesado ante la autoridad administrativa que pronunció la resolución impugnada o dictó el acto que materia de impugnación, dentro del plazo de diez (10) días siguientes a su notificación.</p>	<p style="text-align: center;">IDEM</p>
<p>Artículo 66. Plazo de Resolución y Alcance.</p> <p>El órgano ante el cual se interpone el recurso de reconsideración tendrá un plazo de veinte (20) días para sustanciarlo y resolverlo. En caso de rechazarse el mismo, el interesado podrá recurrir a la impugnación judicial por la vía del proceso contencioso-administrativo. Si vencido el plazo no se dictare resolución, el recurso se tendrá por denegado pudiendo el interesado igualmente recurrir a la impugnación judicial y por la misma vía.</p> <p>Antes de recurrir a la impugnación judicial, el interesado podrá y si lo prefiere interponer previamente Recurso Jerárquico.</p>	<p style="text-align: center;">IDEM</p>
<p style="text-align: center;">SECCIÓN TERCERA RECURSO JERÁRQUICO</p> <p>Artículo 67. Recurso Jerárquico.</p> <p>Contra la resolución que resuelva el recurso de reconsideración, el interesado o afectado podrá interponer el Recurso Jerárquico. En estos casos, la interposición del Recurso Jerárquico será optativa para el interesado.</p> <p>El Recurso Jerárquico también podrá ser interpuesto directamente contra las resoluciones definitivas o actos administrativos que tengan carácter equivalente, anteponiéndolo al recurso de reconsideración.</p> <p>El Recurso Jerárquico se interpondrá ante el órgano jerárquico competente para resolverlo. El plazo para interponer el recurso es de diez (10) días contados desde el día siguiente a su notificación, o al día en que se venció el plazo para resolver el recurso de reconsideración.</p>	<p style="text-align: center;">SECCIÓN TERCERA RECURSO JERÁRQUICO</p> <p>Artículo 67. Recurso Jerárquico.</p> <p>Contra la resolución que resuelva el recurso de reconsideración, el interesado o afectado podrá interponer el Recurso Jerárquico. En estos casos, la interposición del Recurso Jerárquico será optativa para el interesado.</p> <p>El Recurso Jerárquico también podrá ser interpuesto directamente contra las resoluciones definitivas o actos administrativos que tengan carácter equivalente, anteponiéndolo al recurso de reconsideración.</p> <p>El Recurso Jerárquico se interpondrá ante el órgano jerárquico competente para resolverlo. El plazo para interponer el recurso es de diez (10) días contados desde el día siguiente a su notificación, o al día en que se venció el plazo para resolver el recurso de reconsideración.</p>

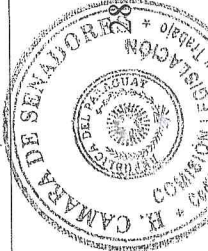


49

<p>Interpuesto el recurso, el órgano competente requerirá al inferior que hubiere dictado el expediente del expediente en forma inmediata.</p> <p>La autoridad competente para resolver los recursos jerárquicos será la máxima autoridad administrativa del organismo.</p>	<p>Interpuesto el recurso, el órgano competente requerirá, de inmediato, la remisión del expediente, al inferior que hubiere dictado el acto recurrido, quien deberá remitirlo dentro del plazo de 48 horas.</p>
<p>artículo 68. Plazo y alcance.</p> <p>Para sustanciar y resolver el Recurso Jerárquico, la autoridad administrativa competente, tendrá el plazo de veinte (20) días.</p> <p>El plazo se computará a partir de la interposición del recurso. Si vencido dicho plazo no se dicta resolución, el recurso se tendrá por denegado.</p> <p>Las resoluciones de los recursos jerárquicos deberán definir el fondo del asunto en trámite en ningún caso podrán disponer que la autoridad inferior dicte una nueva resolución.</p> <p>Resuelto el Recurso Jerárquico el interesado podrá acudir a la impugnación judicial por la vía del proceso contencioso-administrativo.</p>	<p>IDEM</p>
<p>artículo 69. Agotamiento de la vía administrativa.</p> <p>La vía administrativa quedará agotada en los casos siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none">) Cuando se trate de resoluciones que resuelvan los recursos de reconsideración, o recursos jerárquicos en su caso, cuando el administrado haya optado por deducirlos;) Cuando se trate de actos administrativos contra los cuales no proceda ningún recurso en vía administrativa conforme a lo dispuesto en ésta o en otras leyes; y) Cuando se trate de resoluciones distintas de las señaladas en los literales anteriores, siempre que una ley así lo establezca. <p style="text-align: center;">SECCIÓN CUARTA AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA</p>	<p>IDEM</p>



<p>IDEM</p>	<p>Artículo 70. Proceso Contencioso Administrativo.</p> <p>Resuelto el Recurso de Reconsideración o el Jerárquico, en caso de que se haya optado por el primero, podrá el interesado acudir a la impugnación judicial por la vía del proceso contencioso administrativo, dentro del plazo de diez y ocho (18) días.</p>
<p>IDEM</p>	<p>CAPÍTULO V</p> <p>PROCEDIMIENTO SANCIONADOR</p> <p>Sección Primera</p> <p>Principios Generales</p> <p>Artículo 71. Principios Sancionadores.</p> <p>Las sanciones administrativas que las autoridades competentes deban imponer a las personas, estarán sometidas a los principios de legalidad, tipicidad, presunción de inocencia, proporcionalidad, irretroactividad y verdad material.</p>
<p>IDEM</p>	<p>Artículo 72. Principio de Legalidad.</p> <p>Las sanciones administrativas solamente podrán ser impuestas cuando éstas hayan sido previstas por norma expresa, conforme al procedimiento establecido en la presente Ley y disposiciones reglamentarias aplicables.</p>
<p>IDEM</p>	<p>Artículo 73. Principio de Tipicidad.</p> <p>En las infracciones administrativas las acciones u omisiones expresamente definidas en las leyes y disposiciones reglamentarias.</p> <p>Solo podrán imponerse aquellas sanciones administrativas expresamente establecidas en las leyes y disposiciones reglamentarias.</p> <p>Las sanciones administrativas, sean o no de naturaleza pecuniaria, no podrán implicar en ningún caso ni directa ni indirectamente la privación de libertad. }</p>



IDEM

Artículo 74. Principio de Presunción de Inocencia y derechos de las personas.

Se presume la inocencia de las personas mientras no se demuestre lo contrario en idóneo procedimiento administrativo.

En el procedimiento administrativo sancionador, el presunto infractor tendrá derecho a:

Recibir la comunicación de su imputación en forma previa y detallada, así como a disponer de copias, medios y plazos indispensables para la preparación de su defensa en libre comunicación;

Ofrecer, practicar, controlar e impugnar pruebas;

Acceder, por sí o por intermedio de su defensor, a las actuaciones del procedimiento, las cuales en ningún caso podrán ser secretas para él.

A abstenerse de declarar, o a no declarar contra sí mismo, contra su cónyuge o contra la persona con quien está unida ni contra sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad inclusive.

A que no se le opongan pruebas obtenidas o actuaciones producidas en violación de las normas jurídicas.

IDEM

Artículo 75. Principio de Proporcionalidad.

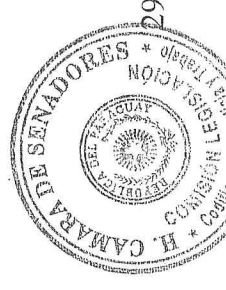
El establecimiento de sanciones pecuniarias deberá prever que la comisión de las infracciones tipificadas no resulte más beneficiosa para el infractor que el cumplimiento de las normas infringidas.

Se deberá guardar la debida adecuación entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la sanción aplicada, considerándose especialmente los siguientes criterios para graduación de la sanción a aplicar:

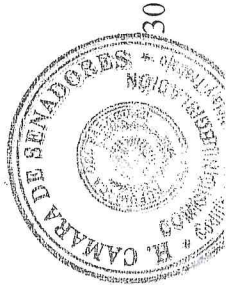
La existencia de intencionalidad o reiteración.

La naturaleza de los perjuicios causados.

La reincidencia.



<p>Artículo 76. Principio de Irretroactividad. sólo serán aplicables las disposiciones sancionadoras que estuvieran vigentes en el momento de producirse los hechos que constituyan la infracción administrativa.</p>	<p>IDEM</p>
<p>Artículo 77. Principio de Verdad Material. El procedimiento administrativo sancionador, durante su tramitación, deberá propender a la búsqueda de la verdad material u objetiva, garantizando con su ejercicio, la observancia de los demás principios contemplados en este capítulo. En tal sentido, la Administración podrá requerir y producir cuantos dictámenes e informes que resulten necesarios para el esclarecimiento del hecho investigado.</p>	<p>IDEM</p>



IDEM

artículo 78. Prescripción de Infracciones y Sanciones.

Las infracciones prescribirán en el término de dos (2) años. La prescripción de las infracciones quedará interrumpida mediante la iniciación del procedimiento sancionador.

IDEM

artículo 79. Relación con otros procesos.

La responsabilidad administrativa es independiente de la responsabilidad penal y civil.

En caso de sobreseimiento o absolución del encausado en el proceso penal, no se podrá alegar en el procedimiento administrativo la existencia del hecho principal sobre el cual hubiese recaído el sobreseimiento o la absolución, si la sentencia hubiese declarado su inexistencia. Esta disposición no se aplica cuando en la sentencia se ha decidido que el hecho no constituye hecho punible, o cuando el sobreseimiento, o la absolución, se ha fundado en que el agente está exento de responsabilidad penal.

Después de la condena en el proceso penal, no se podrá negar en el procedimiento administrativo sancionador la existencia del hecho principal que constituye el hecho punible, ni impugnar la culpa del condenado. La sentencia dictada en juicio penal no será oponible al obligado por el hecho de otro, si aquél no tuvo ocasión de ejercer su defensa.

IDEM

SECCIÓN SEGUNDA
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

artículo 80. Etapas.

Los procedimientos administrativos sancionadores que se tramiten, deberán contemplar necesariamente las sucesivas etapas que garanticen a las partes intervinientes, el desarrollo efectivo de sus derechos. Necesariamente, deberán ser observadas las siguientes etapas: etapas de actuaciones previas al inicio sumarial, etapa inicial, etapa de tramitación y etapa final o conclusiva.

Se deberá incoar la apertura de procedimientos sancionatorios, cuando la persona imputada presente la falta y cumpla voluntariamente con la sanción impuesta por el ordenamiento jurídico regulatorio.



54

<p>artículo 81. Recursos y Efectos.</p> <p>ontra la resolución que imponga una sanción, procederán los recursos administrativos previstos en la presente Ley. Los recursos interpuestos contra actos administrativos que spongan sanciones tendrán efectos suspensivos, salvo en aquellos casos en los que la dministración considere que su ejecución y eficacia inmediata sean impostergables por zones de interés público.</p>	<p>IDEM</p>
<p>TÍTULO IV</p> <p>DE LA GESTION Y TRÁMITES ELECTRÓNICOS</p> <p>artículo 82. Utilización de medios electrónicos.</p> <p>os trámites y actuaciones que conforman los procedimientos administrativos previstos en i presente Ley, así como los actos y medidas administrativos que en virtud de la misma se icten o dispongan, podrán realizarse por medios electrónicos.</p> <p>u validez jurídica y su valor probatorio serán idénticos a los de las actuaciones dministrativas que se tramiten por medios convencionales.</p>	<p>TÍTULO III</p> <p>IDEM</p>
<p>artículo 83. Reglamentación de uso de medios electrónicos.</p> <p>a utilización de recursos tecnológicos para la gestión pública se conducirá conforme a la gislación específica que se sancione para regularlos o la reglamentación que en su defecto icte el Poder Ejecutivo.</p>	<p>IDEM</p>
<p>TÍTULO V</p> <p>DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS</p> <p>artículo 84. En los procedimientos administrativos iniciados antes de la fecha de vigencia e esta Ley, se aplicarán los plazos de la misma a partir de dicha fecha, si con ello se reduce i duración del trámite.</p>	<p>TÍTULO IV</p> <p>IDEM</p>

55



<p>O CONTEMPLA</p>	<p>Artículo 85. Derogación Deróganse los artículos 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 de la Ley N° 4679/13 “De trámites administrativos” y todas las disposiciones legales generales contrarias a esta Ley.</p>
<p>Artículo 85. La presente Ley entrará en vigencia un año después de su publicación en la Gaceta Oficial de la República. Dentro de dicho plazo, el Poder Ejecutivo dictará los reglamentos y disposiciones a que hubiere lugar y adoptará las medidas administrativas necesarias para la mejor aplicación de aquella.</p>	<p>Artículo 86. IDEM</p>
<p>Artículo 86. De forma.</p>	<p>Artículo 87. IDEM</p>





LEY N°...

“DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS”

EL HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN PARAGUAYA

SANCIONA CON FUERZA DE

LEY:

TITULO PRELIMINAR

CAPITULO UNICO

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto

La presente Ley tiene por objeto:

- a) Establecer el régimen jurídico de los actos administrativos;
- b) Regular el procedimiento administrativo, incluyendo el régimen de los recursos administrativos y el procedimiento sancionador;
- c) Posibilitar la sustanciación de trámites y actuaciones administrativas por medios electrónicos.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

1. Esta ley es aplicable a los procedimientos y actos administrativos que realicen:

- a) Los organismos de la Administración Central del Estado integrada por los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial; la Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la República, el Ministerio Público, el Consejo de la Magistratura, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y los órganos del Estado de naturaleza análoga;
- b) los gobiernos departamentales; las universidades nacionales; los entes autónomos, autárquicos, los de regulación y de superintendencia; las entidades públicas de seguridad social; las empresas públicas y las empresas mixtas; las sociedades anónimas en las que el Estado sea socio mayoritario; las entidades financieras oficiales; la Banca Central del Estado, y las entidades de la Administración Pública Descentralizada;
- c) las municipalidades.

2. A los efectos de la presente ley, se entenderá por:

- a) Organismos: las instituciones individualizadas en el inciso a) del artículo 2 de la presente ley;
- b) Entidades: las instituciones individualizadas en el inciso b) del artículo 2 de la presente ley;
- c) Administración Pública: los organismos, entidades y municipalidades que realicen actos y procedimientos administrativos.

Congreso Nacional
Honorable Cámara de Senadores
Dgo. Ferrnando Silva Fariña
Senador de la Nación



TITULO II
RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS

CAPITULO I
ACTO ADMINISTRATIVO

Artículo 3. Concepto de acto administrativo

Se entiende por acto administrativo, a los fines de esta ley, toda declaración unilateral efectuada por un órgano de la Administración Pública en ejercicio de funciones administrativas que produce efectos jurídicos de alcance general o particular.

Artículo 4. Reglamentos y actos administrativos individuales.

A los efectos de la presente ley, el acto administrativo se clasifica en:

- a) Acto administrativo reglamentario o reglamento: que es el acto administrativo que produce efectos jurídicos de alcance general;
- b) Acto administrativo individual: que es el acto administrativo que produce efectos jurídicos de alcance particular.

Artículo 5. Clases de reglamentos.

Los reglamentos se clasifican en:

- a) Reglamento Interno, que va dirigido y obliga a los agentes de la Administración.
- b) Reglamento externo, que contiene disposiciones obligatorias para la generalidad de los habitantes, sea en materias determinadas, sea dentro de circunscripciones territoriales delimitadas.
- c) Reglamento de ejecución, dictado para el mejor cumplimiento de la ley. Detalla, precisa y aclara el contenido y alcance de la Ley para viabilizar o facilitar su aplicación. No puede crear obligaciones o prohibiciones nuevas sino proveer las disposiciones necesarias para el mejor cumplimiento de la ley.

Artículo 6. Competencia para dictar las diversas clases de reglamentos

1. Tiene competencia para dictar reglamentos internos el Presidente de la República para los agentes de los órganos de la administración del Poder Ejecutivo, incluso para los entes descentralizados en materias que no estén especialmente regladas en sus respectivas leyes orgánicas. Tienen también competencia para dictar esta clase de reglamentos las autoridades que por ley o reglamento de organización administrativa o por facultad implícita en el orden jerárquico, pueden reglar la actuación de sus subordinados.
2. Los reglamentos externos sólo pueden ser dictados por la autoridad administrativa con expresa autorización legislativa, para materias y condiciones limitadas.
3. Los reglamentos de ejecución los dicta el Poder Ejecutivo en virtud de la disposición del artículo 238 inciso 3 de la Constitución.

Congreso Nacional Honorable Cámara de Senadores

Abog. Fernando Silva Facetti
Senador de la Nación

Enrique F. Bacchetta Chiriani
Senador Nacional

58

CAPITULO II

REQUISITOS DE REGULARIDAD Y VALIDEZ

Artículo 7. Legalidad

El acto debe estar positivamente autorizado por el ordenamiento jurídico.

Artículo 8. Competencia

El acto debe ser emitido por el órgano facultado por el ordenamiento jurídico, a través de la autoridad competente.

Artículo 9. Finalidad

El acto debe cumplirse con la finalidad que resulte de las normas que lo autorizan, sin poder perseguir otros fines, públicos o privados, distintos de los que justifican el acto. Las medidas que el acto involucre deben ser proporcionalmente adecuadas a aquella finalidad.

Artículo 10. Presupuesto de hecho.

El acto debe responder al hecho o circunstancia que ha tenido en vista el ordenamiento jurídico para autorizarlo.

Artículo 11. Procedimiento.

Habiendo procedimiento prescrito en la ley o reglamento, el acto debe ceñirse a él. En su defecto, la autoridad administrativa puede adoptar el procedimiento que estime más adecuado para satisfacer los intereses públicos en el marco del respeto a los derechos constitucionales de las personas.

Artículo 12. Forma de los actos administrativos

El acto debe observar la forma prescrita en el ordenamiento jurídico. Se expresará por escrito, a menos que su naturaleza exija o permita otra forma distinta de expresión y constancia más adecuada.

El acto escrito indicará la fecha y lugar en que es emitido, denominación del órgano del cual emana, nombre y firma de la autoridad interviniente.

Cuando el acto administrativo es producido por medio de sistemas automatizados o electrónicos, debe garantizarse al administrado conocer el nombre y cargo de la autoridad que lo expide, además de adecuarse a los requisitos específicos que la reglamentación específica determinen para ellos.

Cuando deban emitirse varios actos administrativos de la misma naturaleza, podrá ser empleada firma mecánica o electrónica o integrarse en un solo documento bajo una misma motivación, siempre que se individualice a los administrados sobre los que recae los efectos del acto. Para todos los efectos subsiguientes, los actos administrativos serán considerados como actos diferentes.

CAPITULO III VALIDEZ Y EFICACIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO

Artículo 13. Presunción de legitimidad y ejecutividad

El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su ejecutividad faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que la ley o la naturaleza del acto exigieren intervención judicial


Honorable Cámara de Senadores
Fernando Silva Ferrer
Senador de la Nación



Artículo 14. Eficacia

El acto administrativo individual adquiere eficacia desde el día siguiente al de su notificación al interesado o desde el día que dicho acto determine.

El acto administrativo reglamentario adquiere eficacia desde el día siguiente al de su publicación o desde el día que dicho acto determine.

La reglamentación determinará los medios, requisitos y formalidades de las notificaciones y publicaciones.

Artículo 15. Ejecutoriedad

Los actos administrativos causan inmediata ejecutoriedad, salvo en aquellos casos en que una disposición establezca lo contrario o necesiten aprobación o autorización.

Artículo 16. Fuerza Ejecutiva

El instrumento en que conste el acto administrativo, otorgado en debida forma por el órgano competente, es instrumento público y tiene fuerza ejecutiva.

Artículo 17. Prescripción Liberatoria

Las acciones provenientes de los actos administrativos creadores de obligaciones a cargo de los administrados, prescribirán en el término de cinco (5) años, salvo que en leyes especiales se establezcan plazos diferentes.

La interrupción y suspensión de los plazos de prescripción se rigen por el Código Civil.

Artículo 18. Caducidad

Los derechos y obligaciones regidos por el Derecho Administrativo pueden extinguirse también por caducidad, cuando el acto administrativo que los concede o establece, así lo prescribe, o cuando la extinción se produce ipso jure por disposición de la ley, como el vencimiento de una concesión o del periodo legal de un cargo público.

El tiempo de caducidad no se suspende ni interrumpe.

CAPITULO IV

SANCIÓN DE LAS IRREGULARIDADES DEL ACTO ADMINISTRATIVO

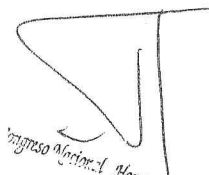
Artículo 19. Nulidad y anulabilidad.

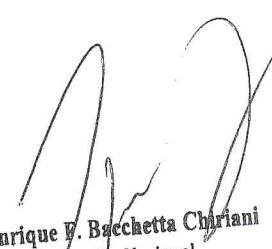
El acto administrativo puede ser nulo o anulable, según sea la gravedad de la trasgresión de las normas a que está sujeto.

Artículo 20. Nulidad.

Es nulo el acto administrativo en los siguientes casos:

- Sanción expresa de nulidad para el caso, estatuida en la ley.
- Acto administrativo dictado contra expresa prohibición de la ley.
- Inexistencia del presupuesto de hecho, falta de causa o falsa causa.
- Actos que vulneren la Constitución o regulen materias reservadas a las leyes.
- Incompetencia manifiesta por razón de la materia o del territorio.


Congreso Nacional Honorable Cámara de Senadores
Sog. Ferrnando Silva
Senador de la


Enrique F. Baechetta Chiriani
Senador Nacional



- f) Inobservancia total y absoluta del procedimiento exigido en la ley, especialmente las relativas a la defensa del particular afectado;
- g) Inobservancia total y absoluta de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados.
- h) Error manifiesto de hecho o de derecho, dolo o violencia, en cuanto hubiese determinado el pronunciamiento o desviado el acto de su correcta finalidad.
- i) Cuando el acto constituya un hecho punible o fuera consecuencia de éste

Artículo 21. Anulabilidad.

Es anulable el acto administrativo irregular que no esté incurso en las causales de nulidad establecidas en el artículo anterior y sea subsanable sin grave lesión del ordenamiento jurídico.

No obstante, el defecto de forma o de procedimiento solo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados.

La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas sólo implicará la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo.

Artículo 22. Revisión de oficio de los actos nulos.

Los actos que incurren en las causales de nulidad establecidas en el artículo 20 carecen de estabilidad y no pueden válidamente generar derechos subjetivos frente al orden público y a la necesidad de vigencia de la legalidad. Podrán ser revocados o sustituidos por razones de ilegitimidad aun en sede administrativa.

Artículo 23. Revisión de oficio de actos anulables que no generen derechos subjetivos o no afecten intereses legítimos.

Los actos anulables que no generen derechos subjetivos o no afecten intereses legítimos podrán ser revocados en sede administrativa en cualquier momento, en todo o en parte, por la misma autoridad que los dictó, o por el respectivo superior jerárquico

Artículo 24. Declaración judicial de nulidad de actos anulables.

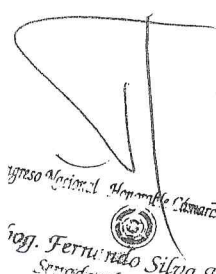
Si el acto anulable estuviere firme y consentido y hubiere generado derechos subjetivos a favor de particulares que se estén cumpliendo, sólo se podrá impedir su subsistencia y la de los efectos aún pendientes mediante declaración judicial de nulidad demandada por la Administración que emitió el acto.

Será competente para declarar la nulidad de los actos anulables que demande la Administración, el juez en lo civil y comercial de la jurisdicción del domicilio de la Administración.

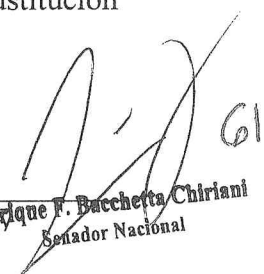
Artículo 25. Saneamiento del acto anulable.

El acto administrativo afectado por alguna causal de anulabilidad puede ser saneado mediante:

- a) ratificación por el órgano superior, cuando el acto hubiere sido emitido con incompetencia en razón de grado y siempre que la avocación, delegación o sustitución fueren procedentes.
- b) confirmación por el órgano que dictó el acto, subsanando el vicio que lo afecte.


Fog. Fernando Silva Fariñas
Senador de la

Legislativo Honorable Cámara de Senadores


Enrique F. Bacchetta Chiriani
Senador Nacional



Los efectos del saneamiento se retrotraerán a la fecha de emisión del acto objeto de ratificación o confirmación

Artículo 26. Errores materiales.

La autoridad puede corregir en cualquier momento los errores de escritura, de operaciones aritméticas y demás errores notorios del acto administrativo, de oficio o a petición de parte.

CAPITULO V

REVOCACIÓN DE LOS ACTOS REGULARES

Artículo 27. Revocación de actos administrativos discrecionales.

Es revocable el acto administrativo cuando fuere discrecional y de ejecución sucesiva o continuada en los siguientes casos:

- a) Por cambio de las circunstancias de hecho;
- b) Por cambio de nueva tecnología aplicable en la materia;
- c) Por cambio de la ley bajo la cual se produjo el acto;
- d) Por cambio del criterio del autoridad respecto del mejor modo de satisfacer las necesidades públicas.

En todos estos casos la revocación sólo tiene efecto para el futuro.

Artículo 28. Actos irrevocables.

Es irrevocable el acto administrativo reglado que genere derechos subjetivos o afecte intereses legítimos, tanto si es de ejecución única como de ejecución sucesiva o continuada.

Es irrevocable el acto administrativo discrecional de ejecución única que genere derechos subjetivos o afecte intereses legítimos,

Artículo 29. Revocación con indemnización.

Aún cuando el acto administrativo sea irrevocable según las reglas precedentes, la autoridad puede disponerlo para impedir o eliminar graves perjuicios al bien público, indemnizando en todo caso al particular el daño por la revocación.

Artículo 30. Racionalidad de la revocación.

Si la facultad para la revocación del acto es discrecional, la autoridad debe ejercerla razonablemente, atendiendo tanto a la causa como a la finalidad.

Artículo 31. Revocación a favor del particular.

Pueden ser revocados los actos considerados irrevocables cuando la revocación es a favor del particular afectado, siempre que no concurran condiciones que lo impidan como las siguientes:

- a) Que no se trate de facultades regladas de las que no puede apartarse la autoridad administrativa.
- b) Que lo que se concede con la revocación a uno, no se le niegue a otro.
- c) Que la revocación no afecte derechos de terceros.

Congreso Nacional Honorable Cámara de Senadores
1609. Fernando

Enrique F. Bacchetta Chiriani
Senador Nacional
62



Artículo 32. Reglas no aplicables.

Las precedentes reglas no tienen aplicación en el proceso de formación del acto administrativo que puede ser revocado, modificado o confirmado en las diversas instancias.

TITULO III

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

CAPÍTULO I

PRINCIPIOS DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

Artículo 33. Aplicación de principios jurídicos.

Toda actuación administrativa se sustenta fundamentalmente en los principios expuestos en el presente artículo, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo.

Los principios señalados servirán también de criterio interpretativo para resolver las cuestiones que puedan suscitarse en la aplicación de las reglas de procedimiento, como parámetros para la generación de otras disposiciones administrativas de carácter general, y para suplir los vacíos en el ordenamiento administrativo. La relación de principios enunciados no tiene carácter taxativo ni limitativo. Estos son:

- a) **Principio de la legalidad.** Los actos administrativos se ajustarán a los procedimientos que establezca el ordenamiento jurídico.
- b) **Respeto a los derechos fundamentales de las personas** La substanciación de cualquier procedimiento administrativo deberá respetar los derechos fundamentales de las personas previstos en la Constitución y en las leyes. En todo procedimiento administrativo del cual pudiera derivarse una sanción o la revocación o cancelación de un acto administrativo que haya otorgado un derecho subjetivo a los administrados se garantizará el derecho a la defensa.
- c) **Principio de escrituración.** El procedimiento administrativo y los actos administrativos a los cuales da origen se expresarán por escrito en formatos impresos o electrónicos, a menos que su naturaleza exija o permita otra forma más adecuada de expresión y constancia.
- d) **Principio de gratuidad.** Todo el procedimiento administrativo y las actuaciones derivadas del mismo serán gratuitos para los interesados. Los particulares sólo estarán obligados a realizar prestaciones personales o patrimoniales en favor de la Administración, cuando la Ley expresamente lo establezca.
- e) **Principio de celeridad y economía procesal.** Los procedimientos administrativos se desarrollarán con economía, simplicidad y celeridad, evitando la realización de trámites y diligencias innecesarias o que constituyan mero formalismo, a fin de alcanzar una decisión en tiempo razonable, sin que ello vulnere el ordenamiento jurídico.
- f) **Principio de simplicidad.** Los trámites establecidos por la autoridad administrativa deberán ser sencillos, debiendo eliminarse toda complejidad innecesaria. Los requisitos exigidos deberán ser racionales y proporcionales a los fines que se persigue cumplir.
- g) **Principio de Oficialidad.** Sin perjuicio del impulso que realicen las partes, el procedimiento administrativo será impulsado de oficio por el funcionario responsable. El funcionario responsable de cada proceso podrá disponer de oficio el practicamiento de

Abog. Fernando Silva Facetti
Senador de...

Enrique F. Bacchetta Chiriani
Senador Nacional
63



actuaciones, diligenciamientos de prueba, como cualquier otro acto de impulso procesal que no haya sido ofrecido ni requerido por las partes.

- h) **Principio de objetividad.** Las autoridades administrativas deberán actuar sin ninguna clase de discriminación hacia los administrados, tanto en la substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte, otorgándoles tratamiento y tutela igualitarios frente al procedimiento, resolviendo conforme al ordenamiento jurídico y con atención al interés general.
- i) **Principio del informalismo.** Las normas de procedimiento deben ser interpretadas en forma favorable a la admisión y decisión final de las pretensiones de los administrados, de modo que sus derechos e intereses no sean afectados por la exigencia de aspectos formales que puedan ser subsanados dentro del procedimiento, siempre que el informalismo no afecte derechos de terceros o el interés público.
- j) **Principio de transparencia y de publicidad.** El procedimiento, así como toda actuación administrativa, se realizarán con transparencia, de manera que permitan y promuevan el conocimiento, contenidos y fundamentos de las decisiones que se adopten en los mismos. En consecuencia, salvo las excepciones establecidas en el ordenamiento jurídico, son públicos los actos de los órganos de la Administración y los documentos que le sirvan de sustento o complemento directo o esencial.
- k) **Principio de razonabilidad y proporcionalidad.** Todas las decisiones de la autoridad administrativa deben ajustarse a los límites de la facultad atribuida y mantener la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido. Las competencias administrativas sólo pueden ser válidamente ejercidas en la extensión e intensidad proporcionales a lo que sea realmente demandado para el cumplimiento de la finalidad del interés público a que están unidas.

Artículo 34. Derecho de las personas en los procedimientos administrativos

Las personas, en sus relaciones con la Administración, tienen derecho a:

- a) conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados, y obtener copia de los documentos que rolan en el expediente y la devolución de los originales, salvo que por mandato legal o reglamentario éstos deban ser acompañados a los autos, a su costa;
- b) identificar a las autoridades y al personal al servicios de la Administración, bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos;
- c) eximirse de presentar documentos que no correspondan al procedimiento, o que ya se encuentren en poder de la Administración;
- d) acceder a las actuaciones en los términos previstos en la ley;
- e) ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y funcionarios, que habrán de facilitarles el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. Los actos de instrucción que requieran la intervención de los interesados habrán de practicarse en la forma que resulte más cómoda para ellos y sea compatible, en la medida de lo posible, con sus obligaciones laborales o profesionales,
- f) exigir las responsabilidades de la Administración Pública y del personal a su servicio, cuando así corresponda legalmente;
- g) obtener información acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos, actuaciones o solicitudes que se propongan realizar, y cualesquiera otros que les reconozcan la Constitución y las leyes.



Artículo 35. Procedimientos especiales

Los procedimientos administrativos que tengan regímenes especiales en las leyes seguirán vigentes y las disposiciones sobre procedimientos establecidas en los capítulos III y V del presente Título les serán aplicables sólo en forma supletoria.

El capítulo IV referido al régimen recursivo se aplicará obligatoriamente a todo procedimiento.

CAPITULO II

EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO

Artículo 36. Formación del expediente.

El procedimiento administrativo deberá constar en un expediente escrito en formatos impresos o electrónicos, a menos que su naturaleza exija o permita otra forma más adecuada de expresión y constancia.

En el expediente escrito se asentarán los documentos presentados por los interesados, por terceros y otros órganos públicos, con expresión de la fecha y hora de su recepción. Asimismo, se incorporarán las actuaciones y los documentos y resoluciones que el órgano administrativo remita a los interesados, a terceros o a otros órganos públicos y las notificaciones y comunicaciones a que estas den lugar, con expresión de la fecha y hora de su envío.

Artículo 37. Información general obligatoria

Todas los organismos y entidades sometidos a la presente Ley prepararán y difundirán al público, mediante los medios de publicación que se establezcan en la reglamentación, los reglamentos e instrucciones referentes a las estructuras, funciones, comunicaciones y jerarquías de sus dependencias. Asimismo en todas las dependencias al servicio del público, se informará a éste por los medios adecuados, sobre los fines, competencias y funcionamiento de sus distintos órganos y servicios.

Igualmente informarán a los interesados sobre los métodos y procedimientos vigentes en la tramitación o consideración de su caso.

Artículo 38. Tramitación expeditiva.

Los órganos administrativos utilizarán procedimientos expeditivos en la tramitación de aquellos asuntos que así lo justifiquen. Cuando sean idénticos los motivos y fundamentos de las resoluciones, se podrán usar medios de producción en serie, siempre que no se lesionen las garantías jurídicas de los interesados.

CAPITULO III

PROCEDIMIENTO ORDINARIO ADMINISTRATIVO

Artículo 39. Procedimiento no formal.

El procedimiento ordinario administrativo no es formal, en el sentido que a continuación se expresa:

- Si no existe procedimiento especial prescrito en la ley, la autoridad llamada a ejecutarla puede elegir el procedimiento más adecuado, atendiendo a la celeridad, eficacia y razonabilidad de la ejecución, dentro del marco de las disposiciones establecidas en la presente ley.

Fernando Silveira
Senador



- b) Puede obviar formas o etapas del procedimiento, incluso resolver con la mera fórmula “como se pide” o “no ha lugar” si la cuestión planteada es simple y de toda evidencia en cuanto a los hechos alegados y el derecho aplicable.
- c) Las deficiencias formales no darán lugar a nulidad siempre que sean subsanables, retro trayendo el procedimiento en lo que fuere posible.

Artículo 40. Parte interesada.

Es parte interesada, legitimada para el procedimiento administrativo:

- a) la que invoque un derecho o impugne una obligación en un acto administrativo dictado o solicitado para su caso particular (derecho subjetivo);
- b) la que solicite la declaración de un derecho a su favor o la exención de una obligación, de una disposición de carácter general que eventualmente le sea aplicable (interés legítimo);
- c) la que sea o pueda ser afectada por decisión de la autoridad al resolver sobre derecho u obligaciones de terceros;
- d) la que recurre a la instancia administrativa como procedimiento previo para promover demanda ordinaria contra la Administración.

Artículo 41. Capacidad de obrar.

Tienen capacidad para actuar en el procedimiento administrativo las personas físicas y jurídicas.

Las asociaciones que carezcan de personalidad jurídica podrán actuar en cuestiones que les afecten directamente, o en representación de sus miembros o asociados involucrados en dichas cuestiones de interés gremial o colectivo.

Artículo 42. Actuación por sí o por poder.

La parte interesada podrá ejercer por sí misma sus derechos ante la Administración pública.

Para ejercerla mediante mandatario, debe hacerlo por intermedio de abogado matriculado. La parte interesada podrá otorgar poder en escritura pública o por una autorización con firma autenticada por escribano público u otorgada por acta en el expediente administrativo respectivo.

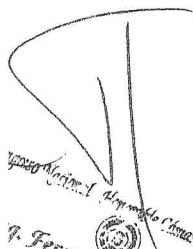
Artículo 43. Notificaciones.

La resolución puede ser notificada directamente al interesado con la firma del mismo en el expediente, por cédula de notificación, por correo con aviso de retorno, telegrama colacionado o medios electrónicos, conforme a la reglamentación que se dicte para el efecto. En caso de ser ignorado el domicilio, se citará a la parte interesada por edictos que se publicarán en los medios que determine la reglamentación, bajo apercibimiento de que, en caso de no comparecer con justa causa, se proseguirá el procedimiento en rebeldía.

Artículo 44. Los plazos

Los plazos serán obligatorios para los interesados y la Administración.

Cuando no se hubiere establecido plazo especial para la realización de trámites, notificaciones y citaciones, cumplimiento de intimaciones y emplazamientos, contestación de traslados, vistas e informes, aquel será de diez (10) días.


Fernando Sifra Fariña
Senador de la Nación


Enrique F. Bacchetta Chiriani
Senador Nacional



Antes del vencimiento de un plazo podrá la Administración de oficio o a pedido del interesado disponer su ampliación, por el tiempo razonable que fijare mediante resolución fundada y siempre que no resulten perjudicados derechos de terceros.

Artículo 45. Cómputo de plazos.

Los términos en días se computarán desde el día siguiente de la notificación del acto administrativo. Sólo se contarán los días hábiles, salvo disposición legal en contrario o habilitación resuelta de oficio o petición de parte. En la instancia administrativa se computarán como días hábiles los días sábados sólo cuando la administración esté abierta al público en esos días.

Los términos de meses y años se computan desde el día siguiente a la fecha de su notificación, hasta la medianoche del día de la misma fecha del calendario, incluidos los feriados, sin consideración al número de días del mes o del año. Si en el mes de vencimiento del término no hubiere día correspondiente al de su comienzo, el término vencerá el último día del mes de vencimiento.

Artículo 46. Iniciación del procedimiento.

El procedimiento podrá ser iniciado por la parte interesada o de oficio por la autoridad competente.

Artículo 47. Presentación.

El escrito de presentación del interesado expresará su nombre y apellido, domicilio, el carácter en que se presenta, la autoridad a la que se dirige y la exposición sucinta de los hechos y derechos que invoca.

Si existe prueba documental que respalde su derecho, la acompañará o indicará la oficina en que se encuentra. Si desea su desglose y devolución presentará copias que serán autenticadas por el encargado de la mesa de entradas o de la recepción del documento o por el funcionario que intervenga en el trámite.

Artículo 48. Información y orientación.

Si el interesado lo necesita, los funcionarios de la oficina competente para atender la cuestión, le informarán y orientarán sobre la corrección de su escrito, la autoridad competente y los demás requisitos que deben observarse.

Artículo 49. Impulsión del procedimiento.

El procedimiento se impulsará a instancia del interesado o de oficio por la autoridad en todo lo conducente al objeto perseguido.

Artículo 50. Pruebas.

Si los hechos alegados por el interesado no hubiesen sido suficientemente justificados con la pruebas que haya acompañado o indicado en su primera presentación, la autoridad le emplazará para que lo haga por los medios, plazos y formas que le serán señalados.

Sin perjuicio de las pruebas aportadas, la Administración podrá ordenar todas aquellas diligencias que considere pertinentes.

Artículo 51. Colaboración.

Los órganos de la Administración en general deberán colaborar con la autoridad interviniente proporcionando sin tardanza los informes, certificados u otros documentos que ésta les solicite.

Congreso Nacional
Honorable Cámara de Senadores
Abog. Fernando Sica



La comunicación de dicha autoridad con los demás órganos se hará directamente, sin necesidad de recurrir a la autoridad superior para que ésta retransmita el pedido.

Artículo 52. Pronunciamiento en el procedimiento ordinario.

La resolución que ponga fin al procedimiento ordinario decidirá las cuestiones planteadas por los interesados y será fundada. La resolución debe ser pronunciada por escrito y motivada con la mención de los hechos probados (motivados) y cita de las disposiciones legales aplicables (justificación). La Administración Pública está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos, cualquiera sea su forma de iniciación.

El plazo máximo para dictar resolución en el procedimiento ordinario será de tres (3) meses desde la iniciación del procedimiento, salvo plazo distinto, establecido por ley.

En el caso de que el hecho y el derecho invocados por el peticionante sean manifiestos, la resolución puede simplemente expresar su conformidad con la petición, en la inteligencia de que podrán ser demostrados obviamente sus fundamentos si la misma resolución llega a ser recurrida.

Artículo 53. Silencio de la Administración.

En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, si no se dictare la resolución definitiva dentro de los plazos establecidos en la ley se tendrá por denegada la petición, a los efectos de interponer los recursos administrativos respectivos.

Artículo 54. De la Renuncia.

Todo interesado podrá desistir de su solicitud, o cuando ello no esté prohibido por el ordenamiento jurídico, renunciar a sus derechos. Si el escrito de iniciación se hubiera formulado por dos o más interesados, el desistimiento o la renuncia solo afectará a aquellos que lo hubiesen formulado.

Artículo 55. Medidas Cautelares

La autoridad administrativa podrá dictar y disponer las medidas cautelares que considere necesarias para preservar la salud, la seguridad pública, el orden o cualquier otra razón de interés general.

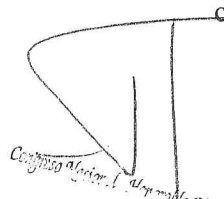
Podrá igualmente disponerlas para asegurar el resultado de los procedimientos conducidos por la Administración sustanciados de oficio o por impulso de los administrados.

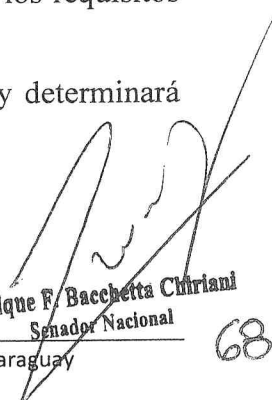
La Administración podrá hacer efectivas y ejecutar las medidas cautelares que dicte o disponga por sus propios medios, salvo los casos donde la ley requiera intervención y autorización judicial expresa.

Artículo 56. Pronunciamiento en peticiones que no requieran substanciación.

A falta de disposición expresa, toda petición, presentación o solicitud de naturaleza administrativa dirigida por los particulares a los órganos de la administración pública y que no requiera substanciación, deberá ser resuelta dentro de los veinte (20) días siguientes a su presentación o a la fecha posterior en la que el interesado hubiere cumplido los requisitos legales exigidos.

A los efectos previstos en el presente artículo, la reglamentación de esta ley determinará cuáles son las peticiones que no requieren de substanciación.


Abog. Fernando Silva Facetti
Senador de la Cámara de Senadores


Enrique F. Bacchetta Chiriani
Senador Nacional



Artículo 57. Normas procesales supletorias.

Son de aplicación supletoria en el procedimiento ordinario administrativo las normas del Código Procesal Civil, siempre que no sean incompatibles con las de la presente ley que se consideran especiales en materia administrativa.

CAPITULO IV

PROCEDIMIENTO DE LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

Sección Primera

Disposiciones Generales

Artículo 58. Procedencia

Los recursos administrativos proceden contra toda clase de resolución de carácter definitivo o actos administrativos individuales que tengan carácter equivalente, siempre que dichos actos administrativos a criterio de los interesados afecten, lesionen o pudieren causar perjuicio a sus derechos subjetivos o intereses legítimos.

Para efectos de esta Ley, se entenderán por resoluciones definitivas o actos administrativos que tengan carácter equivalente a aquellos actos administrativos que pongan fin a una actuación administrativa.

El régimen recursivo previsto en el presente capítulo será común y obligatorio para todos los procedimientos administrativos.

Artículo 59. Improcedencia

No proceden recursos administrativos contra los reglamentos

Tampoco proceden contra los actos administrativos de carácter preparatorio o de mero trámite, salvo que se trate de actos que determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión.

Artículo 60. Forma de Presentación

Los recursos se presentarán de manera fundada, cumpliendo con los requisitos y formalidades, en los plazos que establece la presente Ley.

Artículo 61. Efectos de la interposición de recursos administrativos.

La interposición de cualquier recurso no suspenderá la ejecución del acto impugnado, salvo que una norma expresa establezca lo contrario. No obstante, el órgano administrativo competente para resolver el Recurso, podrá suspender la ejecución del acto recurrido, de oficio o a solicitud del recurrente, cuando:

- Dicha ejecución pueda causar un daño de difícil o imposible reparación al recurrente o un daño proporcionalmente mayor que los perjuicios que la suspensión le acarrearía al Estado;
- cuando se alegue y acredite prima facie un vicio grave que acarree la nulidad del acto impugnado, y
- por razones de interés público.

Congreso Nacional
Honorable Cámara de Senadores
Abog. Fernando Silva
Senador de c.

Enrique F. Bacchetta Chiriani
Senador Nacional



Artículo 62. Terceros afectados

Si con la impugnación de una resolución se afectasen derechos subjetivos o intereses legítimos de terceras personas, individuales o colectivas, la autoridad administrativa deberá hacerles conocer la correspondiente impugnación.

Artículo 63. Resolución

Los recursos administrativos previstos en la presente Ley, serán resueltos confirmando o revocando total o parcialmente la resolución impugnada, o en su caso, desestimando el recurso si éste estuviese interpuesto fuera de término, no cumplierse las formalidades señaladas expresamente en disposiciones aplicables o si no cumplierse los requisitos de legitimación respectivos.

La resolución expondrá en forma motivada los aspectos de hecho y de derecho en los que se fundare, y se referirá siempre a las pretensiones formuladas por el recurrente, sin que en ningún caso pueda agravarse su situación inicial como consecuencia exclusiva de su propio recurso.

Artículo 64. Prueba

La autoridad administrativa, de oficio o a pedido de parte, podrá determinar la apertura de un término de prueba realizando al efecto las diligencias correspondientes.

El plazo para la prueba, en esta instancia, será determinado a criterio de la autoridad conforme a las circunstancias y conforme a la reglamentación de la presente Ley.

El término de prueba procederá sólo cuando haya nuevos hechos o documentos que no estén considerados en el expediente. Los recursos administrativos se ajustarán al procedimiento general establecido en la presente Ley.

Sección Segunda

Recurso de Reconsideración

Artículo 65. Plazo

El recurso de reconsideración procede contra las resoluciones definitivas o actos administrativos que tengan carácter equivalente y deberá ser interpuesto por el interesado ante la autoridad administrativa que pronunció la resolución impugnada o dictó el acto que es materia de impugnación, dentro del plazo de diez (10) días siguientes a su notificación.

Artículo 66. Plazo de Resolución y Alcance

El órgano ante el cual se interpone el recurso de reconsideración tendrá un plazo de veinte (20) días para sustanciarlo y resolverlo. En caso de rechazarse el mismo, el interesado podrá recurrir a la impugnación judicial por la vía del proceso contencioso-administrativo. Si vencido el plazo no se dictare resolución, el recurso se tendrá por denegado pudiendo el interesado igualmente recurrir a la impugnación judicial y por la misma vía.

Antes de recurrir a la impugnación judicial, el interesado podrá y si lo prefiere, interponer previamente Recurso Jerárquico.

Congreso Nacional
Honorable Cámara de Senadores
Abog. Fernando Silva
Senador de la Nación

Enrique J. Bacchetta Chiriani
Senador Nacional



Sección Tercera

Recurso Jerárquico

Artículo 67. Recurso Jerárquico

Contra la resolución que resuelva el recurso de reconsideración, el interesado o afectado podrá interponer el Recurso Jerárquico. En estos casos, la interposición del Recurso Jerárquico será optativa para el interesado.

El Recurso Jerárquico también podrá ser interpuesto directamente contra las resoluciones definitivas o actos administrativos que tengan carácter equivalente, anteponiéndolo al recurso de reconsideración.

El Recurso Jerárquico se interpondrá ante el órgano jerárquico competente para resolverlo. El plazo para interponer el recurso es de diez (10) días contados desde el día siguiente a su notificación, o al día en que se venció el plazo para resolver el recurso de reconsideración.

Interpuesto el recurso, el órgano competente requerirá al inferior que hubiere dictado el acto la remisión del expediente en forma inmediata.

La autoridad competente para resolver los recursos jerárquicos será la máxima autoridad administrativa del organismo.

Artículo 68. Plazo y alcance

Para sustanciar y resolver el Recurso Jerárquico, la autoridad administrativa competente, tendrá el plazo de veinte (20) días.

El plazo se computará a partir de la interposición del recurso. Si vencido dicho plazo no se dicta resolución, el recurso se tendrá por denegado.

Las resoluciones de los recursos jerárquicos deberán definir el fondo del asunto en trámite y en ningún caso podrán disponer que la autoridad inferior dicte una nueva resolución.

Resuelto el Recurso Jerárquico el interesado podrá acudir a la impugnación judicial por la vía del proceso contencioso-administrativo.

Sección Cuarta

Agotamiento de la Vía Administrativa

Artículo 69. Agotamiento de la vía administrativa

La vía administrativa quedará agotada en los casos siguientes:

- Cuando se trate de resoluciones que resuelvan los recursos de reconsideración, o los jerárquicos en su caso, cuando el administrado haya optado por deducirlos;
- Cuando se trate de actos administrativos contra los cuales no proceda ningún recurso en vía administrativa conforme a lo dispuesto en ésta o en otras leyes; y
- Cuando se trate de resoluciones distintas de las señaladas en los literales anteriores, siempre que una ley así lo establezca.

Artículo 70. Proceso Contencioso Administrativo

Resuelto el Recurso de Reconsideración o el Jerárquico, en caso de que se haya optado por interponerlo, podrá el interesado acudir a la impugnación judicial por la vía del proceso contencioso administrativo, dentro del plazo de DIEZ Y OCHO (18) días.

F. Fernando Silva Jacinto
Senador de la Nación

Enrique F. Bacchetta Chiriani
Senador Nacional



CAPÍTULO V

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

Sección Primera

Principios Generales

Artículo 71. Principios Sancionadores

Las sanciones administrativas que las autoridades competentes deban imponer a las personas, estarán sometidas a los principios de legalidad, tipicidad, presunción de inocencia, proporcionalidad, irretroactividad y verdad material.

Artículo 72. Principio de Legalidad

Las sanciones administrativas solamente podrán ser impuestas cuando éstas hayan sido previstas por norma expresa, conforme al procedimiento establecido en la presente Ley y disposiciones reglamentarias aplicables.

Artículo 73. Principio de Tipicidad

Son infracciones administrativas las acciones u omisiones expresamente definidas en las leyes y disposiciones reglamentarias.

Solo podrán imponerse aquellas sanciones administrativas expresamente establecidas en las leyes y disposiciones reglamentarias.

Las sanciones administrativas, sean o no de naturaleza pecuniaria, no podrán implicar en ningún caso ni directa ni indirectamente la privación de libertad.

Artículo 74. Principio de Presunción de Inocencia y derechos de las personas.

Se presume la inocencia de las personas mientras no se demuestre lo contrario en idóneo procedimiento administrativo.

En el procedimiento administrativo sancionador, el presunto infractor tendrá derecho a:

- a) Recibir la comunicación de su imputación en forma previa y detallada, así como a disponer de copias, medios y plazos indispensables para la preparación de su defensa en libre comunicación;
- b) Ofrecer, practicar, controlar e impugnar pruebas;
- c) Acceder, por sí o por intermedio de su defensor, a las actuaciones del procedimiento, las cuales en ningún caso podrán ser secretas para él.
- d) A abstenerse de declarar, o a no declarar contra sí mismo, contra su cónyuge o contra la persona con quien está unida ni contra sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad inclusive.
- e) A que no se le opongan pruebas obtenidas o actuaciones producidas en violación de las normas jurídicas.

Artículo 75. Principio de Proporcionalidad

El establecimiento de sanciones pecuniarias deberá prever que la comisión de las infracciones tipificadas no resulte más beneficiosa para el infractor que el cumplimiento de las normas infringidas.

Congreso Nacional
Honorable Cámara de Senadores
Abog. Fernando...

Enrique F. Bacchetta Chiriani
Senador Nacional



Se deberá guardar la debida adecuación entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la sanción aplicada, considerándose especialmente los siguientes criterios para la graduación de la sanción a aplicar:

- a) La existencia de intencionalidad o reiteración.
- b) La naturaleza de los perjuicios causados.
- c) La reincidencia.

Artículo 76. Principio de Irretroactividad

Sólo serán aplicables las disposiciones sancionadoras que estuvieran vigentes en el momento de producirse los hechos que constituyan la infracción administrativa.

Artículo 77. Principio de Verdad Material

El procedimiento administrativo sancionador, durante su tramitación, deberá propender a la búsqueda de la verdad material u objetiva, garantizando con su ejercicio, la observancia de los demás principios contemplados en este capítulo. En tal sentido, la Administración podrá requerir y producir cuantos dictámenes e informes que resulten necesarios para el esclarecimiento del hecho investigado.

Artículo 78. Prescripción de Infracciones y Sanciones

Las infracciones prescribirán en el término de dos (2) años. La prescripción de las sanciones quedará interrumpida mediante la iniciación del procedimiento sancionador.

Artículo 79. Relación con otros procesos.

1. La responsabilidad administrativa es independiente de la responsabilidad penal y civil.
2. En caso de sobreseimiento o absolución del encausado en el proceso penal, no se podrá alegar en el procedimiento administrativo la existencia del hecho principal sobre el cual hubiese recaído el sobreseimiento o la absolución, si la sentencia hubiese declarado su inexistencia. Esta disposición no se aplica cuando en la sentencia se ha decidido que el hecho no constituye hecho punible, o cuando el sobreseimiento, o la absolución, se ha fundado en que el agente está exento de responsabilidad penal.
3. Después de la condena en el proceso penal, no se podrá negar en el procedimiento administrativo sancionador la existencia del hecho principal que constituye el hecho punible, ni impugnar la culpa del condenado. La sentencia dictada en juicio penal no será oponible al obligado por el hecho de otro, si aquél no tuvo ocasión de ejercer su defensa.

Sección Segunda

Etapas del Procedimiento Sancionador

Artículo 80. Etapas.

Los procedimientos administrativos sancionadores que se tramiten, deberán contemplar necesariamente las sucesivas etapas que garanticen a las partes intervinientes, el desarrollo efectivo de sus derechos. Necesariamente, deberán ser observadas las siguientes etapas: etapas de actuaciones previas al inicio sumarial, etapa inicial, etapa de tramitación y etapa final o conclusiva.

Será innecesaria la apertura de procedimientos sancionatorios, cuando la persona imputada acepte la falta y cumpla voluntariamente con la sanción impuesta por el ordenamiento jurídico regulatorio.

Abog. Ferrnando Silva
Senador de la Cámara

Enrique F. Bacchetta Chiriani
Senador Nacional

Congreso Nacional
Honorable Cámara de Senadores



Artículo 81. Recursos y Efectos.

Contra la resolución que imponga una sanción, procederán los recursos administrativos previstos en la presente Ley. Los recursos interpuestos contra actos administrativos que dispongan sanciones tendrán efectos suspensivos, salvo en aquellos casos en los que la Administración considere que su ejecución y eficacia inmediata sean impostergables por razones de interés público.

TÍTULO IV

DE LA GESTION Y TRÁMITES ELECTRÓNICOS

Artículo 82. Utilización de medios electrónicos

Los trámites y actuaciones que conforman los procedimientos administrativos previstos en la presente Ley, así como los actos y medidas administrativos que en virtud de la misma se dicten o dispongan, podrán realizarse por medios electrónicos.

Su validez jurídica y su valor probatorio serán idénticos a los de las actuaciones administrativas que se tramiten por medios convencionales.

Artículo 83. Reglamentación de uso de medios electrónicos.

La utilización de recursos tecnológicos para la gestión pública se conducirá conforme a la legislación específica que se sancione para regularlos o la reglamentación que en su defecto dicte el Poder Ejecutivo.

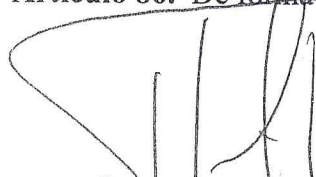

TITULO V

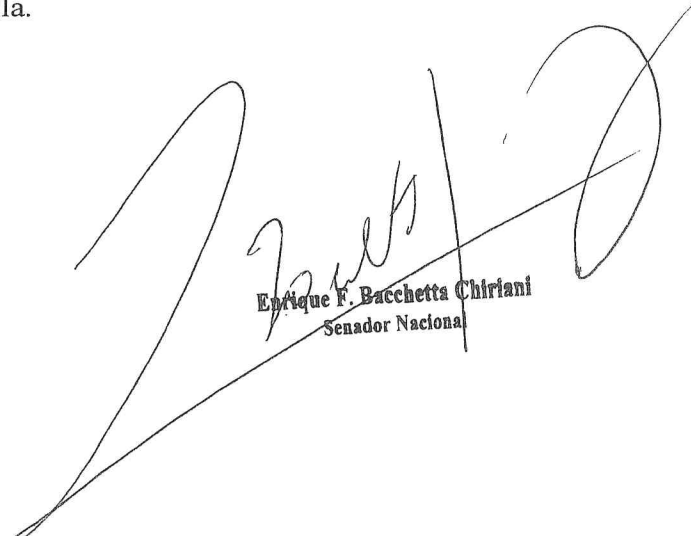
DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS

Artículo 84. En los procedimientos administrativos iniciados antes de la fecha de vigencia de esta Ley, se aplicarán los plazos de la misma a partir de dicha fecha, si con ello se reduce la duración del trámite.

Artículo 85. La presente Ley entrará en vigencia un año después de su publicación en la Gaceta Oficial de la República. Dentro de dicho plazo, el Poder Ejecutivo dictará los reglamentos y disposiciones a que hubiere lugar y adoptará las medidas administrativas necesarias para la mejor aplicación de aquella.

Artículo 86. De forma.


Congreso Nacional Honorable Cámara de Senadores

Abog. Fernando Silva
Senador de la Nación


Enrique F. Bacchetta Chiriani
Senador Nacional

74



Asunción, 31 de julio de 2019.

Señor
Senador Blas Llano Ramos, Presidente
Honorable Cámara de Senadores
Presente

De nuestra mayor consideración:

Nos dirigimos a Vuestra Honorabilidad, y por su intermedio a la Honorable Cámara de Senadores, a objeto de presentar el Proyecto de Ley “DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS”; y en cumplimiento a lo establecido en el último párrafo del artículo 203 de la Constitución Nacional y del artículo 106 de nuestro Reglamento Interno, para la presentación de un proyecto de ley, pasamos a desarrollar la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

1.- Introducción

En nuestra comunidad actual concurren tres realidades inobjetable: Una mayor dependencia ciudadana en las prestaciones públicas reservadas a la Administración del Estado, un notable incremento de la actividad reglamentaria de esta en la regulación de las más variadas materias y actividades, y finalmente un aumento sustancial de las facultades cuasi-judiciales de la Administración a través del ejercicio de sus potestades disciplinarias y facultades sancionatorias. Se genera como consecuencia, un estado de proximidad e inmediatez con la Administración, más directo, concreto, estrecho y constante, que aquel ocasional, que sobreviene de manera intermitente con los demás poderes o funciones del Estado.

La sociedad moderna requiere la ineludible incursión de la Administración del Estado tanto en la satisfacción de los requerimientos más básicos como en los más sofisticados del ser humano, siendo en consecuencia instrumento esencial para perseguir y garantizar, de forma similar, desde una existencia digna para el más desprotegido de los individuos cómo y con

Congreso Nacional Honorable Cámara de Senadores
Dgo. Fernando Sil...

75
Enrique F. Bacchetta Chiriami
Senador Nacional



idéntica prolijidad, hasta el más ambicioso proyecto de desarrollo y modernización.

La lógica nos indica que en idéntica proporción a una mayor extensión e influencia de la Administración en la vida del ciudadano, debería generarse paralela y permanentemente como consecuencia, una actualizada y eficiente regulación a la gestión administrativa integral, que acompañe el ámbito extendido de intervención e influencia.

Los hechos sin embargo nos revelan una realidad muy distinta. La actividad legislativa, en su función regulatoria de la conducta administrativa ha sido en la última década escasa e insuficiente. El parlamento nacional ha asumido más bien una actitud reactiva e inmediatez contemplando cuestiones coyunturales y circunstanciales, respondiendo a necesidades y requerimientos de urgencia o de ineludible atención, muchas veces contaminado por efecto de los vaivenes políticos de la República. Pero escaso o nula ha sido la producción de propuestas creativas o novedosas de reforma estructural y funcional administrativas, adaptadas a la modernidad y a las actuales exigencias de la Nación.

Es cierto que en los últimos tiempos se han promulgado algunas normas trascendentes a la función y organización administrativa, sobre todo en el campo de la gestión financiera del Estado. Avanzamos sin lugar a dudas con la sanción aislada de algunas normas de singular significancia. Pero es extensa aún el área a explorar y disciplinar, llegándose inclusive al extremo de que subsistan normas constitucionales de incidencia administrativa que por disposición de nuestra carta magna requieren de reglamentación legal expresa, sin que a la fecha se haya logrado la elaboración de proyecto serio alguno en relación a ellas; siendo un claro ejemplo de ello la normas referida al derecho a petionar a las autoridades (Artículo 40 de la C.N.).

En este estado de “proximidad e inmediatez” con la Administración al que aludíamos, sobreviene, y más que nunca, la misión histórica de promover regulación eficiente que discipline los vínculos entre el Estado y el administrado, sustentada en la impérenme vocación jurídica del Derecho Administrativo de concertar las prerrogativas de la Administración con los derechos y garantías esenciales del ciudadano, en justo y adecuado equilibrio.

Enrique F. Bacchetta Chiarani
Senador Nacional

og. Fernando Silva
Senador de r

76



La actividad administrativa, como función del Estado, exige, por su dinamismo y amplio espectro de acción, la tarea permanente de indagar y explorar las mejores y más eficientes modalidades de gestión. Tal prospección hace a su esencia.

En este sentido, la sociedad paraguaya no es una excepción. Los cambios generados por fenómenos actuales¹ han evidenciado la imposibilidad del Estado para hacer frente a sus necesidades. A fin de hacer frente a estos transformaciones, el Estado paraguayo requiere una profunda revisión de su gestión y organización administrativa, y consecuentemente a ello, reformular sus funciones y estructura en atención a las necesidades y requerimientos presentes.

Teniendo en cuenta estas consideraciones, se hace imperiosa la promulgación de una Ley de Procedimiento Administrativo, como una herramienta vital para disciplinar la funcionalidad de la Administración a fin de asegurar la satisfacción directa, eficiente y sostenida de las necesidades del ciudadano.

Frente a la consideración estática del procedimiento simplemente como una consecución de actos administrativos de trámite, el procedimiento administrativo debe ser considerado como modo de desarrollo de la función administrativa. El procedimiento es la manifestación sensible de dicha función, asegurando el acierto del resultado y garantizando los derechos e intereses de los ciudadanos.

Además es necesario considerar que el procedimiento es la vía que conduce la relación administración-administrado. En tal sentido, la ley de procedimientos administrativos garantiza que el ejercicio de potestades públicas no vulnere los derechos fundamentales de las personas, estableciendo mecanismos de protección y defensa frente a las arbitrariedades.

Es menester tener presente igualmente que la importancia de la regulación del procedimiento administrativo radica en que constituye una



herramienta tendiente a satisfacer el bien común, siendo una garantía formal a favor de los administrados que le aseguran el poder de reacción frente a los actos perjudiciales a sus derechos subjetivos o intereses legítimos, y un importante factor de autocontrol por parte de la Administración en el respeto de la legalidad y razonabilidad.² Incluso llega a afirmarse que el procedimiento administrativo tiene la finalidad de hacer aplicar no sólo el orden jurídico garantizando los derechos e intereses de los administrados, sino que esencialmente pretende salvaguardar el interés público.

Vemos así como el procedimiento administrativo tiene una doble finalidad: constituir una garantía de derechos de los particulares y asegurar la pronta y eficaz satisfacción del interés general, mediante la adopción de medidas y decisiones necesarias por los órganos de la Administración. Por ello dicho procedimiento sirve como protección jurídica para el particular y es, a su vez, un privilegio de ella.³

Conviene observar que tiene que haber una íntima relación entre el procedimiento y la materia que es su objeto. El procedimiento es la forma con arreglo a la cual un órgano público ha de ejercer sus funciones; luego, el procedimiento, para ser útil, ha de acomodarse a los fines, a la función. Así como los jueces aplican los distintos derechos sustantivos utilizando un procedimiento jurídico, la Administración aplica el derecho administrativo empleando un procedimiento propio; las reglas que lo disciplinan forman el régimen de procedimiento administrativo, que nos suministra los instrumentos que permiten elaborar una teoría general del procedimiento administrativo.⁴

2.- Situación del Paraguay

La insatisfacción con los procedimientos administrativos y las organizaciones siempre fue un motivo de preocupación en muchos países, sean estos desarrollados o en vías de desarrollo.⁵ Paraguay no es una excepción a ello.

² CASSAGNE, JUAN CARLOS. *Curso de Derecho Administrativo*. Tomo II. La Ley. Décima Edición. Buenos Aires, Argentina. Año 2011. P. 380.

³ HUTCHINSON, TOMÁS. *Régimen de Procedimientos Administrativos*. Editorial Astrea. 8ª Edición. Buenos Aires. 2006. p. 31.

⁴ HUTCHINSON –Nota al Pie N° 3, p. 31.

⁵ GORDILLO, AGUSTÍN. *Administrative Procedure Reform: The Experience of the Americas*. En *VV.AA. European Review of Public Law*. European Public Law Organization. Esperia Publications. Londres, Reino Unido. 2009. pP. 699.

Senador de la Cámara de Senadores
Ing. Fernando Silva Farina

Enrique F. Boschetta Chiriani
Senador Nacional
78



En el caso paraguayo, es la ausencia de un cuerpo legal que regule el procedimiento administrativo de manera uniforme, coherente y transversal a la conducta integral de la Administración, el principal problema. Las normas que conducen el proceso ante la Administración se hallan dispersas e inconexas, y se encuentran incorporadas fortuitamente en ciertas cartas orgánicas institucionales y legislación administrativa especial, careciendo de toda orientación sistémica. En algunos casos ni existe regla regulatoria. Debe advertirse que Paraguay es uno de los pocos países de Latinoamérica que carece de una norma integral de procedimiento administrativo.

Si bien la propia Constitución paraguaya materializa el derecho a petionar a las autoridades⁶, el ejercicio de este derecho fundamental muchas veces se ve constreñido, limitado y hasta truncado, precisamente por la ausencia del referido cuerpo legal.

Actualmente en el Paraguay existen sendos procedimientos administrativos como órganos administrativos. Esta situación lleva al administrado a sumergirse en un *mare magnum* procedimental que induce a confusiones e incertidumbres a la hora de realizar actuaciones ante las distintas reparticiones administrativas. En definitiva, un Estado que por medio de sus actuaciones induce a confusiones a los particulares estaría violando principios básicos del derecho administrativo, tales como los principios de eficiencia, eficacia, certidumbre jurídica y transparencia de la Administración.

El ejemplo más ilustrativo de esta violación sistemática sea probablemente la ausencia de plazos para contestar la petición de los particulares por parte de ciertos órganos administrativos⁷. Dado que la legislación que regula el proceso contencioso administrativo exige el agotamiento de la instancia administrativa⁸, las administraciones se valen de estos vacíos en el procedimiento para no expedirse en relación a la petición e impedir al particular el acceso al fuero contencioso-administrativo. De esta

⁶ El texto del Art. 40 de la Constitución Nacional se refiere expresamente al derecho de los particulares de petionar a las autoridades. Dicho artículo connota la vital importancia de contemplar normas que ordenen el ejercicio de potestades públicas así como de los derechos de petición, defensa o reclamo de las personas, las cuales se plasman en una ley de procedimiento administrativo.

⁷ Algunos de los órganos administrativos que carecen de un plazo para contestar las peticiones ejercen funciones de suma trascendencia en la Administración paraguaya, tales como el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y el Ministerio de Justicia y Trabajo (MJT).

⁸ Ver inciso a) del artículo 3° de la Ley 1462.

Congreso Nacional
Honorable Cámara de Senadores
Abog. Fernando Silva
Senador

Enrique F. Bacchetta Chiarini
Senador Nacional



manera el administrado, con sobradas razones válidas para impugnar el acto, cae en el absurdo de no tener abierta la vía jurisdiccional precisamente porque la Administración, al dilatar su pronunciamiento, le detrae el legítimo derecho de promover la revisión jurisdiccional de la medida.

3.- Contenido puntual de la Ley de Procedimientos Administrativos

En relación al mismo, destacamos algunas de sus principales áreas de regulación:

Con respecto al régimen de los actos administrativos, el anteproyecto propone definir el acto administrativo, identificar los elementos fundamentales para su validez y regularidad, establecer causas de nulidad y anulabilidad y medios para su revocación, entre otros aspectos. Estas disposiciones resultan de capital importancia para que, tanto autoridades como funcionarios y particulares, tengan claras reglas acerca de los requisitos formales y sustanciales que deben reunir las resoluciones administrativas, decretos y otros actos administrativos, a fin de ser regulares y por tanto válidos.

Además de prescribir los principios y normas conductoras del procedimiento administrativo ordinario, el anteproyecto plantea una regulación de los recursos administrativos (incluyendo los tipos, los plazos para la interposición y resolución, la forma de interposición, la autoridad competente para sustanciarlos y resolverlos), y, específicamente, las reglas del procedimiento administrativo sancionador (sumarios administrativos). Asimismo, establece con claridad los casos en los cuales se considera agotada la vía administrativa, aspecto fundamental para que el particular tenga derecho a acceder a la vía judicial de impugnación de actos ilegítimos de la Administración ante el fuero contencioso-administrativo.

Por último cabe resaltar que el anteproyecto incluye, además, importantes disposiciones para la modernización de la función pública, pues posibilita la realización de trámites y actuaciones administrativas a través de la vía electrónica, creando así las capacidades normativas que faciliten el desarrollo del Gobierno Electrónico en el país.

Su aprobación constituirá un avance sustancial en la consolidación del Estado de Derecho.


F. Ferrnndo Silva Ferrer
Senador de la Honorable Cámara de Senadores

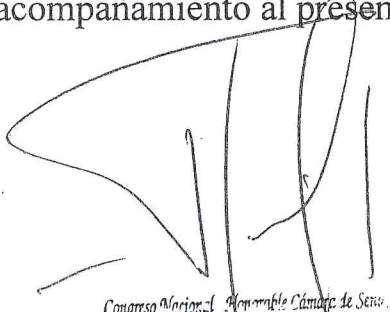


Enrique F. Bacchetta Chiriani
Senador Nacional

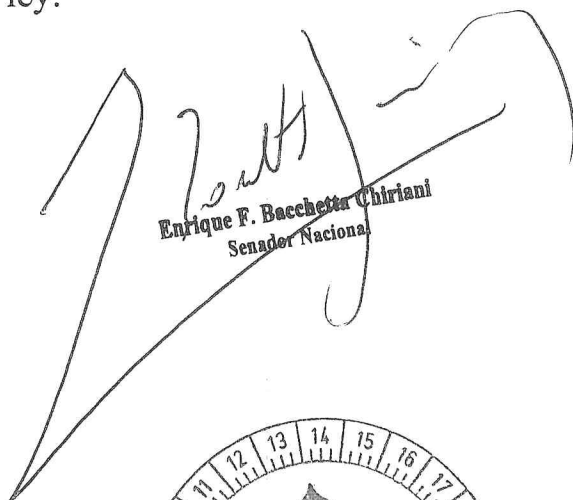


Finalmente, debe indicarse que Paraguay es uno de los pocos países del mundo que no cuenta con una ley de procedimientos administrativos. Su sanción no hace sino concretar la más ambiciosa reivindicación histórica y normativa de los derechos y garantías del ciudadano frente a las prerrogativas de la Administración.


Cecilio Báez nos decía: “...de todos los problemas político-sociales el que preocupa hoy más que nunca el espíritu humano es, sin duda, el de conciliar la libertad con el poder. La lucha de los dos principios es, sin embargo, tan antigua como la sociedad”.

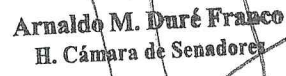
Por las consideraciones expuestas, es que solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al presente proyecto de ley.


Congreso Nacional Honorable Cámara de Sen.

Abog. Fernando Silva Facetti.
Senador de la Nación



Enrique F. Bacchetta Chiriani
Senador Nacional




Abog. Verónica Villalba A.
Gabinete de la Presidencia
Honorable Cámara de Senadores


Arnaldo M. Duré Franco
H. Cámara de Senadores




César José Luz



CONGRESO NACIONAL
H. Cámara de Senadores

ASUNTOS CONSTITUCIONALES
LEGISLACION Y CODIFICACION
JUSTICIA, TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
ASUNTOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS

Nuestra Visión: “Un Poder Legislativo con compromiso ético y social orientado a brindar un servicio de excelencia”

Nuestra Misión: “Legislar y controlar en representación del pueblo, mediante una gestión eficiente, eficaz y transparente”

M.H.C.S. N° 2222.-

H. CAMARA DE DIPUTADOS
SECRETARIA GENERAL
DIRECCION DE PROYECTOS EN ESTUDIO
Fecha de Entrada Asunción:
Según Acta N°..... Sesión.....
Expediente N°.....

Asunción, 22 de junio de 2020

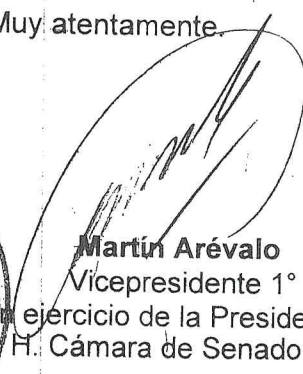
Señor Presidente:

De conformidad con lo establecido en el artículo 204 de la Constitución, le enviamos para someter a vuestra consideración el Proyecto de Ley, **DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS**, presentado por los senadores Fernando Silva Facetti y Enrique Bacchetta, aprobado por este alto Cuerpo legislativo en sesión ordinaria del 11 de junio del 2020.

Muy atentamente.


Hermelinda Alvarenga de Ortega
Secretaria Parlamentaria




Martín Arévalo
Vicepresidente 1°
En ejercicio de la Presidencia
H. Cámara de Senadores

A Su Excelencia
Pedro Alliana Rodríguez, Presidente
Honorable Cámara de Diputados
Poder Legislativo

S-198840

HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
DIRECCION DE MESA DE ENTRADA
FECHA DE RECEPCION

DIA 22 MES JUNIO AÑO 2020

HORA: 13:55

Marycarmen Tejera

RESPONSABLE

Contiene 81 Pag



CONGRESO NACIONAL
H. Cámara de Senadores

ASUNTOS CONSTITUCIONALES
LEGISLACION Y CODIFICACION
JUSTICIA, TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
ASUNTOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS

Nuestra Visión: "Un Poder Legislativo con compromiso ético y social orientado a brindar un servicio de excelencia"

Nuestra Misión: "Legislar y controlar en representación del pueblo, mediante una gestión eficiente, eficaz y transparente"

M.H.C.S. Nº 2222.-

H. CAMARA DE DIPUTADOS	
SECRETARIA GENERAL	
DIRECCION DE PROYECTOS EN ESTUDIO	
Fecha de Entrada Asunción:	
Según Acta Nº	Sección
Expediente Nº	

Asunción, 22 de junio de 2020


Señor Presidente:

De conformidad con lo establecido en el artículo 204 de la Constitución, le enviamos para someter a vuestra consideración el Proyecto de Ley, **DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS**, presentado por los senadores Fernando Silva Facetti y Enrique Bacchetta, aprobado por este alto Cuerpo legislativo en sesión ordinaria del 11 de junio del 2020.

Muy atentamente,


Hermelinda Alvarenga de Ortega
Secretaria Parlamentaria




Martín Arévalo
Vicepresidente 1º
En ejercicio de la Presidencia
H. Cámara de Senadores

Entregado
Rojas
24/06/20
07:55 HS

A Su Excelencia
Pedro Alliana Rodríguez, Presidente
Honorable Cámara de Diputados
Poder Legislativo

S-198840

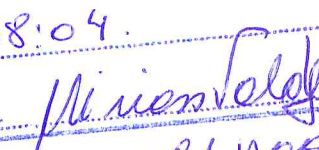
COMISIÓN DE JUSTICIA, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
Honorable Cámara de Diputados
Fecha de Recepción

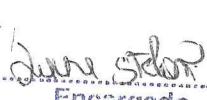
Día Mes Año
24 Junio 2020

Hora: 07:52

Responsable: Ana Barrion

Cont. 81 pag.

COMISION DE LEGISLACION Y CODIFICACION	
H. CAMARA DE DIPUTADOS	
Fecha: 24 / 06 / 20	
Hora: 08:04	
Recibido: 	
Cont. 81 pag.	

H. CAMARA DE DIPUTADOS		
Com. Asuntos Constitucionales		
Fecha de Admisión		
Día	Fecha	Año
24	06	2020
Hora: 01:24		
		
Encargado		

HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
 DIRECCION DE MESA DE ENTRADA
 FECHA DE RECEPCION

DIA: 22 MES: JUNIO AÑO: 2020

HORA: 13:55

Marycarmen Tejera
 RESPONSABLE

Contiene 81 Pág

Fecha: 25-06-20

Hora: 13:44

Recibido por: Ivanna Morel

OBS.: 02 pág.

procesado y 25/06/20

RECIBIDO 25 JUN 2020
 Aveledo Partides C.
 13:30 hrs.



Dirección de Información y Gestión Legislativa
 H.C.D.

Fecha: 26 JUNIO 2020

Hora: 13:33

Recibido por: Glorina Reguizamón

OBS.: 2 pág.